



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**

**El Arbitraje Como Mecanismo de Solución de Controversias en el Subsistema  
de la Integración Económica en Centroamérica**

**Trabajo Investigativo para obtener el Título de Licenciado en Derecho**

**Autor: Mario Alberto Ocaña Izaguirre**

**Tutor: Jesús Jusseth Herrera Espinoza**

**Managua, Nicaragua**

**Octubre 2010**

## **Dedicatoria**

A Dios, que desde el primer momento de mi vida ha estado presente, a quien he depositado todas mis cargas, sueños, metas y ha llenado mi vida de bendiciones.

A mi Padre: Mario José Ocaña Cáceres, quien me ha enseñado a ser una persona perseverante y esforzada en la vida.

A mi Madre, hermanos y amigos que siempre me han ayudado en gran manera.

## **Agradecimiento**

A todos mis profesores, quienes me han transmitido los conocimientos de una noble profesión.

A mi tutor: Jesús Jusseth Herrera Espinoza, quien me ha guiado en la investigación y formación del presente trabajo.

# **El Arbitraje Como Mecanismo de Solución de Controversias en el Subsistema de la Integración Económica en Centroamérica.**

## **Contenido**

<b>Glosario en Términos.....</b>	<b>7</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>9</b>
<b>Objetivo General.....</b>	<b>11</b>
<b>Objetivos Específicos .....</b>	<b>11</b>
<b>Capítulo 1.- Nociones Generales de La Integración Centroamericana.....</b>	<b>12</b>
<b>1.1.- Antecedentes Históricos .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2.- Objetivos de la Integración Centroamericana .....</b>	<b>21</b>
<b>1.3.- Marco Jurídico Básico de la Integración. ....</b>	<b>22</b>
<b>1.3.1.- Protocolo de Tegucigalpa. ....</b>	<b>23</b>
<b>1.3.2.- Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). ....</b>	<b>25</b>
<b>1.3.3.- Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala). ....</b>	<b>26</b>
<b>1.3.4.- Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala).....</b>	<b>27</b>
<b>1.3.5.- Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). ....</b>	<b>29</b>
<b>1.3.6.- Tratado de Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.....</b>	<b>30</b>
<b>1.3.7.- Mercado Común Centroamericano (MCCA).....</b>	<b>30</b>
<b>Capítulo 2.- Introducción a la Institución del arbitraje en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).....</b>	<b>32</b>
<b>2.1.- Antecedentes del Arbitraje. ....</b>	<b>32</b>
<b>2.2.- Nociones del Arbitraje en Centroamérica. ....</b>	<b>33</b>
<b>2.3.- Conceptos de Arbitraje.....</b>	<b>35</b>

<b>2.4.- Naturaleza Jurídica del Arbitraje.....</b>	<b>36</b>
<b>2.5.- Procedimiento Arbitral Como Mecanismo de Solución De Controversias en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.....</b>	<b>39</b>
<b>2.6.- Fundamento Legal del Mecanismo de Solución de Controversias en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.....</b>	<b>40</b>
<b>2.7.- Resoluciones 106-2003 Y 170-2007 del Consejo de Ministro de Integración Económica Centroamericana.....</b>	<b>41</b>
<b>2.8.- Principios del Arbitraje en el Ámbito del Sistema de Integración Económica Centroamericana.....</b>	<b>42</b>
<b>2.9.- Activación del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.....</b>	<b>44</b>
<b>2.10.-Sección Nacional del Mecanismo.....</b>	<b>45</b>
<b>2.11.- Función de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). .....</b>	<b>46</b>
<b>2.12.- Etapa de Consulta.....</b>	<b>47</b>
<b>2.13.- Intervención del Consejo de Ministros de Integración Económica.....</b>	<b>48</b>
<b>2.14.- Inicio del Arbitraje.....</b>	<b>50</b>
<b>2.15.- Lista de Árbitros.....</b>	<b>52</b>
<b>2.16.- Cualidades de los Árbitros.....</b>	<b>53</b>
<b>2.17.- Procedimiento para Recusar a los Árbitros. ....</b>	<b>54</b>
<b>2.18.- Nombramiento de Árbitros Suplentes.....</b>	<b>56</b>
<b>2.19.- Integración del Tribunal Arbitral.....</b>	<b>56</b>
<b>2.20.- Funcionamiento del Tribunal Arbitral.....</b>	<b>58</b>
<b>2.21.- Disponibilidad y Confidencialidad de la Información. ....</b>	<b>59</b>
<b>2.22.- Información Confidencial Sensible.....</b>	<b>60</b>
<b>2.23.- Escrito de Alegatos.....</b>	<b>61</b>
<b>2.24.- Presentación de la Prueba en el Mecanismo. ....</b>	<b>62</b>
<b>2.25.- Audiencias del Mecanismo. ....</b>	<b>63</b>

2.26.- Procedimiento en caso de Rebeldía.....	65
2.27.- Laudo Arbitral.....	66
2.28.- Cumplimiento del Laudo.....	67
2.29 Casos sobre la participación de Nicaragua en el Mecanismo.....	68
2.30.- Suspensión de Beneficios.....	70
2.31.- Valoración Crítica del Mecanismo de Solución de Controversias en Centroamérica.....	72
<b>Capítulo 3.- La Corte Centroamericana de Justicia como Tribunal Arbitral.....</b>	<b>76</b>
3.1.- Creación de la Corte Centroamericana de Justicia.....	76
3.2.- Características de la Corte Centroamericana de Justicia. Naturaleza Jurídica.....	80
3.3.- Organización de la Corte Centroamericana de Justicia .....	81
3.4.- Competencia de la Corte Centroamericana de Justicia.....	82
3.5.- La Función Arbitral de la Corte Centroamericana de Justicia .....	84
3.6.- Principios del Arbitraje en el Ámbito de la Corte Centroamericana de Justicia .....	86
3.7.- Juicio Arbitral de la Corte Centroamericana de Justicia.....	89
3.8.- Presentación de la prueba ante la Corte Centroamericana de Justicia .....	90
3.9.- Audiencia Pública del Proceso.....	91
3.10.- Fase del laudo y su Ejecución.....	92
3.11.- Recursos Aplicables al Laudo Arbitral .....	93
3.12.- Manifestación de la Corte Centroamericana de Justicia Ante el Arbitraje Que Establece el Consejo De Ministros De Integración Económica (COMIECO).....	94
3.13.- Valoración Crítica al Proceso Arbitraje de la Corte Centroamericana de Justicia.....	96
<b>Conclusiones.....</b>	<b>99</b>
<b>Recomendaciones.....</b>	<b>101</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>102</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>104</b>

## Glosario en Términos

<u>Término</u>	<u>Significado</u>
----------------	--------------------

<b>ALIDES:</b>	Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible.
----------------	--

<b>BCIE:</b>	Banco Centroamericano de Integración Económica.
--------------	---

<b>CIAC:</b>	Cámara de Comercio Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje comercial.
--------------	--

<b>CAUCA:</b>	Código Aduanero Uniforme Centroamericano
---------------	--

<b>RECAUCA:</b>	Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
-----------------	--

<b>COSEP:</b>	Consejo Superior de la Empresa Privada.
---------------	---

<b>COMIECO:</b>	Consejo de Ministros de Integración Económica.
-----------------	--

<b>CCJ:</b>	Corte Centroamericana de Justicia.
-------------	------------------------------------

<b>CONAAAACAC:</b>	Confederaciones de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y el Caribe.
--------------------	--

<b>CEC:</b>	Comunidad Económica Centroamericana.
-------------	--------------------------------------

<b>GATT:</b>	General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio)
--------------	--

<b>ICAP:</b>	Instituto Centroamericano de Administración Pública.
--------------	--

<b>MCCA:</b>	Mercado Común Centroamericano.
--------------	--------------------------------

<b>ODECA:</b>	Organización de Estados Centroamericanos.
---------------	---

**OMC:** Organización Mundial del Comercio.

**OP:** Ordenanza de Procedimientos.

**RMP:** Reglas Modelo de Procedimiento.

**SICA:** Sistema de la Integración Centroamericana.

**SIECA:** Secretaria de Integración Económica Centroamericana.

**SCA:** Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano.

**SCMCA:** Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano.

**SITCA:** Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

**PARLACEN:** Parlamento Centroamericano.



## Introducción

El Comercio internacional se ha incrementado en los últimos tiempos motivado por las exigencias del mercado mundial es decir, la globalización que alcanza a todas las naciones y bloques de poder en todas partes del mundo, dando lugar a una diversidad de relaciones comerciales entre empresarios de varios de países o bien de estos últimos con los Estados.

De igual manera este incremento en las relaciones comerciales se ha hecho presente entre los países del istmo centroamericano, quienes han conformado la integración del mismo, llevándola a su máxima expresión en el ámbito comercial, conocido como subsistema de integración económica centroamericana.

Las relaciones comerciales además de traer inversión y desarrollo económico a los países centroamericanos, traen consigo problemas y conflictos entre las partes ya sean personas naturales, jurídicas o bien los mismos Estados, por tal razón, previendo la existencia de este tipo de acontecimientos se ha tratado de crear una forma adecuada y pacífica para dar respuesta a estos conflictos.

De allí la inclusión del arbitraje como método de solución de conflictos comerciales en la región centroamericana, figura que vendría a lograr que las Partes, con ayuda de un tercero, en este caso un árbitro encuentre una solución al conflicto surgido, solucionándolo de manera pacífica, ágil y amigable.

En la actualidad la integración económica centroamericana cuenta con dos Órganos que administran el arbitraje, una de ellas es El Consejo de Ministros de Integración Económica, el cual por medio de la resolución No. 170-2006 establece lo relativo al Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales. El otro órgano de carácter permanente es La Corte Centroamericana de Justicia, la cual regula la figura del arbitraje en sus Estatutos y Ordenanza de Procedimientos.

Con el estudio del tema “El arbitraje como mecanismo de solución de controversias comerciales en el subsistema de la Integración Económica en Centroamérica” el cual está dividido en tres capítulos, se analizará brevemente algunos aspectos de la integración centroamericana, y posteriormente estudiar aspectos fundamentales de la figura del arbitraje dentro de los dos procesos que existen en la integración centroamericana, y ya con algunas nociones y criterios básicos, realizar una valoración crítica de los procesos existentes, en síntesis se pretende analizar la viabilidad, ventajas y eficacia del arbitraje como método para solucionar controversias.

## Objetivo General

Analizar críticamente la Institución del Arbitraje y sus diferentes facetas dentro del Sistema de Integración Económica Centroamericano, para determinar la efectividad del mismo en los conflictos regionales de carácter comercial.

## Objetivos Específicos

- I. Explicar los aspectos generales que dan lugar a la Integración Económica Centroamericana y su marco jurídico Institucional.
- II. Conocer los antecedentes del Arbitraje en el Sistema de Integración Económica Centroamericana, su marco jurídico y las diferentes fases que componen el mecanismo.
- III. Analizar el proceso arbitral que se lleva a cabo en la Corte Centroamericana de Justicia y su fundamento Legal.
- IV. Contrastar los distintos sistemas arbitrales instituidos en el seno del proceso de integración centroamericana.

## Capítulo 1.- Nociones Generales de La Integración Centroamericana

### 1.1.- Antecedentes Históricos

En el período postbélico, en la década de los cincuenta, se abrieron nuevas posibilidades para discutir el tema de la integración. La discusión se centró ahora en la iniciativa de crear una “zona de libre comercio” para facilitar la libre circulación de mercancías en toda la región (Hernández, 1994, p 137).

El 6 de febrero de 1960, el Salvador, Honduras y Guatemala, suscribieron un Acuerdo Tripartito de Asociación Económica. Este se firmó después de una reunión previa de presidentes en el Poy, frontera de Honduras con El Salvador, y cerca de Guatemala, en el mes de enero del mismo año. El acuerdo de febrero dejó abiertas las puertas para que luego entraran Nicaragua y Costa Rica. El documento incorporó, como líneas estratégicas, el libre movimiento de capitales y de personas. Dicho acuerdo entró en vigencia a partir del 24 de abril de 1960 (Hernández, 1994, p 142).

Posteriormente, el 13 de diciembre del mismo año, se suscribió en Managua, Nicaragua, el “Tratado General de la Integración Económica Centroamericana” el cual empezó a regir el 4 de junio de 1961. El tratado fue firmado por todos los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica. El argumento costarricense para abstenerse de la firma del Tratado General (TG) consistió en el temor de llevar a la ruina a la industria nacional al enfrentarla a una mayor competencia. Sin embargo, el tema lo llevó al debate político el Partido Liberación Nacional en las elecciones de 1962, y al ganar este la contienda electoral, el nuevo gobierno firmó el documento en

1963 (Hernández, 1994, p 142). El tratado contemplaba la creación de órganos tales como: Consejo Económico Centroamericano, Consejo Ejecutivo y la Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), y, en el artículo XVIII, contemplaba la creación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sería el ente financiero para el desarrollo regional, el que constituido con un fondo inicial de dieciséis millones de dólares (US\$ 16, 000,000). En su estatuto quedaba abierta la posibilidad para la incorporación de socios extra regionales. El convenio entró en vigencia el 8 de mayo de 1961.

Posteriormente, en 1965, con base en los lineamientos de la “Carta de Punta del Este” de agosto de 1961 y la “Declaración de Centroamérica” de marzo de 1963, se firmó el estatuto del Fondo Centroamericano, con la finalidad de apoyar los proyectos de inversión del sector público relacionados con la integración: transportes, energía eléctrica, educación, prevención de plagas, turismo, tecnología, etc. (Hernández, 1994, 143).

La integración debió afrontar problemas que debilitarían la integración comercial. El 6 de julio de 1968, un año antes de estallar la guerra entre Honduras y El Salvador, los gobiernos de la región emitieron una declaración optimista en la que plantearon intenciones de hacer cambios en las “estructuras tradicionales” e incorporar al proceso a los diversos sectores de Centroamérica.

Los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras expresaron que las medidas adoptadas hasta el momento en el proceso de integración no estaban dando los frutos que esperaban y, por tanto, era necesario buscar alternativas que impactaran en el mejoramiento de la vida rural, por lo que plantearon que se reestructurara el marco institucional de la integración. Pero meses más tarde se agudizó la crisis y estalló la guerra Honduras-El Salvador, hecho que se escenificó en Julio de 1969. A raíz de esta crisis quedó en suspenso el esquema integracionista.

En diciembre de 1969 los Ministros de Relaciones Exteriores del área se reunieron para menguar la controversia entre Honduras y El Salvador, y evaluar la posible reorganización del Mercado Común Centroamericano (MCCA), luego se produjo una

reunión de ministros de hacienda en la que Honduras expuso su tesis el “Modus Operandi”, que sería una especie de acuerdo temporal mientras se producía la reestructuración del esquema en crisis.

Durante 1970, el “Modus Operandi” fue el punto de agenda más importante en las reuniones, y llamó la atención de la comunidad regional (Hernández, 1994, p 147).

Dentro del “Modus Operandi”, se contemplaban una serie de políticas de interés para la comunidad regional: Primero, una política agraria tendente a liberalizar el mercado de los productos agrícolas; segundo, una política arancelaria que conciliara los intereses de los productores, los consumidores y la recaudación fiscal; una revisión de tarifas que apuntaban a lograr una política bien fundada; políticas preventivas para la aplicación de medidas transitorias y extraordinarias en caso de crisis en la balanza de pagos. El “Modus Operandi” fue finalmente rechazado por los demás países, y su no aceptación condujo a la posición extrema de Honduras de retirarse de la integración regional.

La década de los setenta fue un período de inestabilidad política y social en casi todos los países centroamericanos, la que desembocó en violencia en las dos décadas siguientes. En Honduras, durante el primer quinquenio de la década de los setenta, se produjeron fuertes movimientos sociales, fundamentalmente de los campesinos organizados que exigían parcelas de tierra para resolver el problema de subsistencia. Recién habían finalizado los enfrentamientos bélicos con El Salvador. Producto de esto se profundizó el nacionalismo (Hernández, 1994, p 160).

Producto de las agrupaciones de campesinos en Honduras y de la inestabilidad y crisis económica, se produjo un golpe de Estado al gobierno de Ramón Ernesto Cruz, de inspiración reformista, en diciembre de 1972, realizando de esta manera cambios en la política.

Por su parte, en Salvador la crisis política y social no era diferente a la de Honduras, sin embargo esta problemática no tuvo respuesta inmediata de la oligarquía en el poder, de allí que la respuesta que vendrá más tarde será violenta. En octubre,

producto de la crisis económica y política, un grupo de oficiales jóvenes de las fuerzas armadas derrotó, mediante un golpe de Estado, al gobierno del general Romero y llevó al poder a una junta reformista liderada por el coronel Edgar Majano. Esta junta no logró el pleno apoyo de la población, en tanto los grupos radicales de la izquierda le hicieron el vacío, pues no confiaban en ella, ya que la estructura militar tradicional quedaba intacta, aparte de que tenían la pretensión y la fe de alcanzar el poder al igual que lo había logrado en Nicaragua el FSLN, en julio de 1979. De ahí que se aceleró el camino hacia la lucha armada. Estos hechos, entre otros, crearon la coyuntura política y generaron las condiciones objetivas y subjetivas que aceleraron la organización del movimiento revolucionario liderado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que tomó fuerza y beligerancia durante toda la década del ochenta y que en ciertos momentos bien podría haber accedido al poder, si no hubiese mediado la presencia militar y económica de EE.UU (Hernández, 1994, p 163).

En Nicaragua, aunque la situación económica y social hacía crisis en la población, en el descontento social los nicaragüenses no reivindicaban concesiones económicas, sino de tipo político. Esa reivindicación planteaba la salida del poder de la dictadura de la familia Somoza.

Somoza García, en el acto preparativo en la ciudad de León, en septiembre de 1956, para un nuevo lanzamiento presidencial, murió a manos del poeta Rigoberto López Pérez. Le sucedió su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, quien asumió el poder de manera provisoria en 1956, y al siguiente año como presidente constitucional, pero aun así los grupos de oposición siguieron amenazando su gobierno. Luis Somoza muere de una dolencia cardíaca. Así que Anastasio hijo asume el poder (Hernández, 1994, p 164).

Ya en enero de 1963, Silvio Mayorga, Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge Martínez, habían formado el Frente de Liberación Nacional (FLN) que sería la génesis del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En el mismo año (1967) en que fue electo Anastasio Somoza Debayle, comenzaron las columnas

guerrilleras en la montaña de Matagalpa, al mando de Fonseca Amador. Todo el decenio de los setenta se caracterizó por ser un período de gran controversia política en Nicaragua.

La adversidad contra el pueblo de Nicaragua se complicó no solamente por las controversias sociopolíticas y la falta de participación en las decisiones trascendentales del país, sino también por los embates de la naturaleza, ya que, al finalizar 1972 la situación se volvió caótica a raíz de un terremoto de treinta segundos de duración que estremeció la capital Managua, en la media noche del 23 de diciembre. El sismo destruyó el 60% de la ciudad. Las críticas fueron muy fuertes para la familia Somoza, ya que acapararon toda la ayuda internacional para sus colaboradores, lo cual molesto al pueblo y Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) (Hernández, 1994, p 164).

La guerra civil estalló en 1979, y el gobierno de Somoza empezó su declive vertiginoso, y el 19 de Julio de 1979 cayó la dictadura de Somoza y entró en el episodio otro actor Político, el FSLN.

Por otra parte, Guatemala era el país con mayor población de la región. En Guatemala han prevalecido los gobiernos de tipo militar, enfrentados, desde los años cincuenta, con un movimiento guerrillero fuerte. La lucha política no ha cambiado de rumbo desde que, en 1954, con la intervención de la Central de Inteligencia de EE.UU, fue derrocado el gobierno reformista de Jacobo Arbenz Guzmán, poniéndose fin a una década de gobiernos democráticos. Desde entonces, los gobiernos militares han dominado el ambiente político guatemalteco (Hernández, 1994, p 165).

El país más estable políticamente en la región en esas dos décadas fue Costa Rica, donde los procesos democráticos siguieron su curso y la economía se plantó en la diversificación productiva tendente a buscar como alternativa el mercado internacional.



Lo señalado antes, da cuenta de la magnitud de problemas que cada uno de los países enfrentó en el período posterior a la ruptura de la integración regional a finales de los sesenta.

Las nuevas iniciativas de integración en Centroamérica se dan a partir de 1986, a raíz de la crisis centroamericana y las iniciativas de paz, producto de países como México, Panamá, Colombia, Venezuela y otros de la Comunidad Europea, se crearon las condiciones para discutir el tema de la integración regional (Hernández, 1994, p 173).

Las presiones internacionales y regionales en contra de la guerra y a favor de la paz, y la incesante lucha por derrotar las tendencias socializantes de Nicaragua y El Salvador, indujeron a los gobiernos del área, en un primer momento, a ocuparse de la pacificación (Hernández, 1994, p 173).

El acercamiento de los presidentes mediante las cumbres presidenciales para discutir la paz regional, teniendo como trasfondo las presiones de la crisis económica y mientras el ambiente para las exportaciones al resto del mundo se comportaban de forma muy halagadora, creó el contexto propicio para que las iniciativas fueran más allá, dando lugar al planteamiento de soluciones económicas y políticas de carácter global en las que se incorporó de nuevo la idea de la integración (Hernández, 1994, p 173).

El esquema previsto en esta oportunidad, supera la modalidad precedente que privilegiaba la integración comercial. En la nueva versión se han adicionado a los aspectos económicos, los aspectos políticos, sociales y ambientales. En esta nueva etapa, además, el tema de agenda lo abordan los presidentes y sus cancilleres. De lo que se trataba era de buscar una salida que legitimara ante el pueblo el proyecto de pacificación regional, que tenía como finalidad la búsqueda de alternativas al esquema del sandinismo en Nicaragua. Con ese fin se institucionalizaron las reuniones de presidentes (cumbres presidenciales), y por ser el tema preponderantemente político, se apartó de las negociaciones a los ministros de economía y se los sustituyó por los ministros de relaciones exteriores. De esta

manera se facilitaría una metodología para darles seguimientos a las políticas acordadas (Hernández, 1994, p 184).

Se intuyó, a partir de estas iniciativas, que el nuevo patrón de integración podría encaminarse hacia la articulación de lo económico, lo político y lo ideológico, logrando realizarse quince reuniones de presidentes, las primeras diez reuniones de presidentes tenían como fin conseguir que reinara la paz a nivel regional, la libertad de prensa, democracia, entre otros puntos que ayudaría a estabilizar los diferentes gobiernos.

Es hasta la onceava reunión de presidentes que se da el avance más importante en materia de integración. Así la reunión llevada a cabo en Tegucigalpa, Honduras, donde se aprobó el Protocolo de Tegucigalpa, que contiene los lineamientos fundamentales de la integración económica y política, cuyo objetivo primordial es convertir a Centroamérica en una región de Paz, libertad, democracia y desarrollo, constituye todo un hito en materia de integración centroamericana (Hernández, 1994, p 181)

En la reunión, los presidentes decidieron reformar la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en la ciudad de Panamá, Panamá, el 12 de diciembre de 1962. Al efecto los presidentes convinieron en que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una comunidad económica-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito constituyeron el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (Hernández, 1994, p 181)

El Protocolo de Tegucigalpa modificó la estructura institucional de Centroamérica, regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e instituciones de la integración tradicional. La estructura prevista es la siguiente (Hernández, 1994, p 182)

- ✓ Las Reuniones de Presidentes.
- ✓ El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

- ✓ El Comité Ejecutivo.
- ✓ La Secretaría General.

En lo que respecta al Comité Ejecutivo, este tendrá la responsabilidad de dirigir y supervisar la aplicación de las políticas derivadas de las iniciativas de la integración. Así mismo, el Comité Ejecutivo es un grupo de representantes, conformado por seis ciudadanos centroamericanos, uno por cada país, nombrado por el respectivo presidente. Este equipo supervisará el cumplimiento de los compromisos y la plena aplicación de las políticas de integración regional. El Protocolo establece también un Comité Consultivo, es decir, un órgano de consulta que estará formado por representantes empresariales, sindicales, intelectuales y otros miembros activos de la sociedad Centroamericana.

La treceava reunión de presidentes, también conocida como “la declaración de Panamá” fue de vital importancia en materia de integración, ya que, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá, con la presencia del Primer Ministro de Belice y el vicepresidente de República Dominicana, en calidad de observadores, se reunieron en la ciudad de Panamá.

En esta reunión se ratificó la creación de SICA. En el Documento Emanado de la reunión se declaró que (Hernández, 1994, p 184):

*La consolidación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) constituye una prioridad básica para la región y representa la nueva visión global de la integración regional, que permitirá garantizar el desarrollo equilibrado y armónico de los pueblos del istmo. Por esto convenimos en poner en funcionamiento el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a partir del 1° de febrero de 1993, en los términos de las resoluciones que hemos emitido en esta fecha.*

*Los presidentes de Costa Rica y Panamá, atendiendo la invitación de los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, expresamos nuestra decisión de participar activamente en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), dentro de límites que fijan nuestros respectivos ordenamientos, en tanto*

*ratificamos el Protocolo. A la vez reafirmamos el compromiso de seguir contribuyendo a alcanzar los fines y propósitos del Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991.*

Se sometieron al nuevo esquema todos los órganos de la integración tradicional, creados a la luz de los acuerdos del viejo protocolo de los años sesenta.

Todos los órganos, comisiones e instituciones de la integración deberían actuar en forma coherente, coordinada y armónica, en el marco del SICA establecido en el Protocolo de Tegucigalpa. Esta obligación es imperativa y primaria en toda la normativa relacionada con la integración.

Asimismo, se asignó beligerancia jurídica a la Corte Centroamericana de Justicia:

La conclusión de las negociaciones y la suscripción en esta fecha del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, constituyó un paso trascendental en la realización del anhelo centroamericano de justicia, seguridad jurídica y bien común que reafirma el proceso de integración.

Otra reunión de presidentes que fue de gran importancia para llevar a cabo la integración centroamericana fue la celebrada en Guatemala y que lleva por nombre “Declaración de Panamá” En esta reunión los presidentes suscribieron el llamado Protocolo de Guatemala al Tratado General de la Integración Económica Centroamericana, que consolida y moderniza el esquema de la integración en el marco de los acuerdos del SICA, aprobado en el Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991.

## 1.2.- Objetivos de la Integración Centroamericana

Los esfuerzos de los países miembros de la Integración Centroamericana, están dirigidos hacia un buen funcionamiento del sistema, basándose en unos principios concurrentes que guiarán el camino de la integración (Somarriba, 2008, p 66). En términos concretos la integración tiene entre sus metas más importantes, las siguientes:

- ✓ Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
- ✓ Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, narcotráfico y el tráfico de armas.
- ✓ Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto.
- ✓ Logar un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.
- ✓ Alcanzar la unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.
- ✓ Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional.
- ✓ Reafirma y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.

- ✓ Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.
- ✓ Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.

### **1.3.- Marco Jurídico Básico de la Integración.**

En cuanto al ordenamiento jurídico, la Carta de referencia es el Protocolo de Tegucigalpa; sin embargo se han firmado otra serie de acuerdos y convenios, en los cuales se han ido incorporando temas más allá de lo económico e institucional, configurando el siguiente marco jurídico básico de la integración (Somarriba 2008, p 66).

1. Tratado general de integración económica centroamericana
2. Protocolo de Tegucigalpa: Tratado-Constitución del SICA
3. Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)
4. Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
5. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Protocolos (PARLACEN)
6. Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
7. Tratado de Integración Social
8. Tratado Marco de Seguridad Democrática
9. Tratados o Convenios sobre medio ambiente

Este conjunto de entidades, principios, propósitos y ordenamiento jurídico, dan vida al Sistema de la Integración Centroamericana, constituyendo una etapa más del proceso de integración hacia la unidad buscada por los países centroamericanos desde el siglo pasado (Somarriba, 2008, p 67).

Sin embargo puede decirse que este nuevo intento tiene mayor fuerza institucional y que al tener como antecedente todos los intentos anteriores, puede sortear de manera más eficaz los obstáculos existentes en el proceso (Somarriba, 2008, p 67).

### **1.3.1.- Protocolo de Tegucigalpa.**

El protocolo de Tegucigalpa (del 13 de diciembre de 1991) a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos- ODECA- (del 12 de diciembre de 1962), es el marco jurídico constitucional del nuevo Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Es el tratado constitutivo u originario, que consagra la Comunidad de Estados de Centroamérica. En efecto, en ella se afirma que los países Centroamericanos constituyen una comunidad económica y política que aspira a la integración global (Artículos 1,2 y 3 inciso j) (Ulate, 2008, 25).

El Protocolo de Tegucigalpa refleja la voluntad política de los Gobiernos de Centroamérica en la construcción gradual, progresiva y global de la integración de la Región. Representa la culminación de un esfuerzo político orientado a fortalecer la democracia, la paz, la libertad y el desarrollo regional, como presupuestos esenciales del proceso. Fija los nuevos propósitos y principios fundamentales que guían la Comunidad Centroamericana. Modifica y fortalece la estructura institucional, definiendo las funciones y atribuyendo competencias a los diversos Órganos e instituciones que componen el Sistema. Sienta las bases jurídico-institucionales para la formación del nuevo Derecho comunitario centroamericano (Ulate, 2008, p 25).

La estructura orgánica e institucional del Sistema de Integración Centroamericano que se consagra en el Protocolo es única. Sus Órganos principales (artículo 12) son: La Reunión de Presidente, Órgano supremo que dirige y define la política Centroamericana (Art. 13 a 15); el Comité Ejecutivo, encargado de asegurar la ejecución y cumplimiento de las decisiones (Art. 24); el Consejo de Ministros ( sectoriales e intersectoriales), cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento por los Estados Miembros (Art. 16-22); el Comité Consultivo integrado por el sector

empresarial, laboral, académico y otras fuerzas vivas representativas de la sociedad civil (Art. 12); y, la Secretaria General (Art. 25-28). La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia es un órgano de asesoría y consulta (Ulate, 2008, p 26).

Entre sus Instituciones (artículo 12, segunda parte) encontramos: El Parlamento Centroamericano (PARLACEN, 2000), como Órgano de planteamiento, análisis y recomendación y la Corte Centroamericana de Justicia (Órgano Jurisdiccional) encargado de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución de la normativa comunitaria. La Corte representa la conciencia nacional centroamericana y se considera depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana (Ulate, 2008, p 26).

Se trata de dos Órganos de especial importancia que se convierte en los Órganos supranacionales por excelencia.

El Parlamento Centroamericano es fruto de los Acuerdos de Paz para el fortalecimiento de la democracia Centroamericana. Su Tratado Constitutivo se firma en octubre de 1987, y establece su naturaleza como "... un Órgano regional de planteamiento, análisis y recomendaciones sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al Derecho Internacional". Una de las funciones más importantes del Parlamento Centroamericano es impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos (Ulate, 2008, p 26).

La Corte Centroamericana de Justicia creada como Órgano Jurisdiccional para garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o derivados, fue regulada en el Convenio de Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia, del 10 de diciembre de 1992 (adoptado en la XIII Cumbre de Presidente). En su exposición de motivos se establece con claridad que: "Las facultades que se le atribuyen con carácter



excluyente, son jurisdiccionales. Se crea así un Órgano Supranacional que permitirá resolver los problemas propios del “Sistema de la Integración Centroamericana” en forma Pacífica y Civilizada (Ulate, 2008, 27).

### **1.3.2.- Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).**

El 27 de febrero de 1992, el Órgano Supremo del Protocolo de Tegucigalpa, la Reunión de Presidentes realiza la enmienda al Protocolo. Considerando que toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el referido Protocolo y demás Instrumentos debían ser sometido a la Corte Centroamericana de Justicia.

Se hace necesario crear otros métodos alternos de solución de Controversia que de respuestas a los conflictos dentro del Mercado Común Centroamericano que sea ágil, efectivo, vinculantes y con niveles de calidad superior. Por lo cual durante los años 2000 y 2001 se hicieron gestiones para incorporar los métodos alternos al mecanismo de solución de controversias establecido en los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana.

Para la realización de dicha incorporación de métodos alternos se consulto a la Corte Centroamericana de Justicia a quien se le designo un tiempo prudencial para emitir lo que tuviera a bien, pero que en caso de no haber repuesta o que dicha respuesta sea negativa se procedería a reformar el Protocolo de Tegucigalpa para incorporar el uso de alternos de solución de controversias a las diferencias que se presenten en el intercambio comercial del Mercado Común Centroamericano.

De esta manera es que la Reunión de Presidentes aprueba la reforma al Protocolo de Tegucigalpa modificando el artículo 35 del Protocolo e incorporando los métodos alternos, los cuales serian establecidos por el Consejo de Ministro de Integración Económica, dentro de los métodos figura el Arbitraje.

Las decisiones derivadas del Arbitraje serán vinculantes para los Estados Miembros que intervengan en la respectiva diferencia. Y en caso de incumplir con el Laudo Arbitral se podrá suspender beneficios al Estado que ha incumplido el respectivo Laudo. Conformes con la decisión adoptada firmaron la enmienda los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

### **1.3.3.- Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala).**

Suscrito en el año de 1960, es el instrumento jurídico que establece lo que se denomina el Mercado Común Centroamericano –MCCA- consiste en la creación de una zona de libre comercio y un arancel externo común, así como, sienta las bases para la constitución de la Unión Aduanera Centroamericana (SIECA,2006).

Mediante este tratado los países centroamericanos se comprometen a perfeccionar una zona de libre comercio y adoptar un arancel externo común. Se establece el régimen de libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con las únicas limitaciones comprendidas en el Anexo A2 del tratado. En consecuencia todos los productos originarios están exentos de los derechos arancelarios a la importación y exportación, los derechos consulares, y todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación o exportación, o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro orden (SIECA,2006).

Asimismo, las mercancías originarias gozan de tratamiento nacional y están exentas de toda restricción o medida de carácter cuantitativo, con excepción de las medidas de control por razones de sanidad, de seguridad o de policía (SIECA, 2006).

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integración Económica como instrumento de financiamiento y promoción del crecimiento integrado del Mercado Común Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SIECA, 2006).

#### 1.3.4.- Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala).

Suscrito en 1993, establece y consolida el Subsistema de Integración Económica, adaptándolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los países de la Región.

Su objetivo básico es “alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional”. (SIECA, 2006).

El subsistema de Integración Económica debe ajustarse a los siguientes principios y enunciados: legalidad, consenso, gradualidad, flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad, globalidad, simultaneidad y complementariedad. (SIECA, 2006).

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana cuyos avances deberán responder a las necesidades de los países que integran la región (SIECA, 2006).

Forman parte del Subsistema de Integración Económica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La organización institucional del Subsistema de Integración Económica es la siguiente:

##### **1) Son órganos:**

- a) La Reunión de Presidentes de Centroamérica;
- b) El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO);
- c) El Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica;
- d) El Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica;
- e) El Comité Ejecutivo de Integración Económica.

**2) Son órganos técnicos administrativos:**

- a) La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA);
- b) La Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCA);
- c) La Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SCMCA);
- d) La Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA).

**3) Son Instituciones:**

- a) El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE);
- b) El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

**4) Son órganos de asesoría:**

- a) El Comité Consultivo de Integración Económica.

Los actos administrativos del Subsistema de Integración Económica se expresan en Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones.

### **1.3.5.- Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA).**

Aprobado el 24 de julio del año 2003, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 130 julio de 2003.

Suscrito por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica Y Nicaragua conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y los instrumentos jurídicos regionales de integración (Arguello, 2009, p 10).

Este instrumento tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países de la región conforme a los requerimientos del MCCA y de los instrumentos regionales de la integración. Su ámbito de aplicación es el territorio aduanero, sus normas son aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los países signatarios. El Reglamento desarrolla las disposiciones del CAUCA.

El 25 de abril de 2008 el Consejo de Ministro de Integración Económica (COMIECO) aprobó reformas al “CAUCA III”, dando inicio al CAUCA IV y RECAUCA, mediante resolución No. 223-2008 y No 224-2008 respectivamente, desarrollándose los nuevos compromisos en materia aduanera. (Arguello, 2008, p 11).

Según el texto de ambos instrumentos, estos cobraron vigencia a partir del 25 de agosto de 2008. Sin embargo, existen dudas en cuanto a su aplicabilidad, debido a una demanda de nulidad en contra de dichas resoluciones ante la Corte Centroamericana de Justicia (Arguello, 2008, p 11).

Dicha demanda fue interpuesta con acción de nulidad contra la resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) emitida por el COMIECO el 25 de abril de 2008, mediante la cual aprueban la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en base a los artículos 22 literal b y g del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y otras disposiciones legales, presentada por

Confederaciones de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y el Caribe (CONAAAACAC).

### **1.3.6.- Tratado de Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.**

Este tratado es un marco jurídico para la liberalización del comercio de los servicios y la inversión entre las partes, con el establecimiento de reglas claras, transparentes y de beneficio mutuo para la promoción y protección de las inversiones, elevar la competitividad del sector servicio, requisito *sine qua non* de un buen desarrollo del comercio de mercancías y el flujo de capitales y tecnologías (Arguello, 2009, p 11).

Promueve y protege sustancialmente las inversiones en cada parte y crear los procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de la liberalización del comercio regional, para su administración conjunta y para la solución de controversia entre una parte y un inversionista (Arguello, 2009, p 11).

### **1.3.7.- Mercado Común Centroamericano (MCCA).**

El compromiso de conformar una Unión Aduanera en Centroamérica data desde la firma del Tratado General de Integración Económica en 1960, cuando en el artículo 1 de dicho Instrumento, se incluyó el compromiso de “construir una unión aduanera entre sus territorios”. Sin embargo durante las décadas siguientes el esfuerzo de los países se concretó en avanzar en el perfeccionamiento de la zona de libre comercio.

El 29 de octubre de 1993, los países centroamericanos suscribieron el Protocolo de Guatemala, mediante el cual se readecuan las normas del Tratado General a la nueva realidad y necesidades de los países, estableciendo nuevamente, en su

artículo 15, el compromiso de constituir una Unión Aduanera entre sus territorios, la cual se alcanzará de manera gradual y progresiva.

Los esfuerzos de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, están dirigidos hacia la conformación de la Comunidad Económica Centroamericana (CEC), la cual implica libre movimiento de bienes y servicios, factores y la correspondiente armonización de políticas (Somarriba, 2008). En términos concretos la integración tiene entre sus metas más importantes, las siguientes:

- ✓ Estabilización macroeconómica y armonización de políticas
- ✓ Perfeccionamiento de la zona de libre comercio centroamericana
- ✓ Arancel externo común
- ✓ Modernización de las aduanas
- ✓ Mejoramiento de la Infraestructura
- ✓ Atracción de Inversiones
- ✓ Aseguramiento del Financiamiento
- ✓ Coordinación de una política conjunta de relaciones comerciales externas

## **Capítulo 2.- Introducción a la Institución del arbitraje en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).**

### **2.1.- Antecedentes del Arbitraje.**

Aunque hoy en día existen reglas y procedimientos que regulan el arbitraje en forma específica, éste originalmente surgió como mecanismo para resolver disputas entre vecinos, familias, y tribus (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Las disputas eran decididas por uno de los ancianos de la tribu o del pueblo al cual las partes acudían para pedir consejos y guía, dado el respeto de las partes a la sabiduría del anciano. La decisión era obligatoria (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

En Roma, las funciones de un Juez surgían de un mandato conferido por los particulares, quienes buscaban para la solución de sus conflictos a un Magistrado honesto y con amplios conocimientos Jurisdiccionales, éste no recibía su poder del Estado, sino del mandamiento de las partes, por que el litigio era considerado cuestión de orden privado, además tenían algunas referencias sobre el arbitraje en las leyes de partida (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

En las otras épocas, reyes, nobles, y señores feudales designaban jueces con atribuciones de administrar justicia, pero en ningún sistema se prohibía el arbitraje, institución que surge con más fuerza durante la Revolución Francesa como consecuencia de la imposición hasta en forma obligatoria, en la cual se designaban árbitros para fallar en instancia única y sin formalismo (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).



## 2.2.- Nociones del Arbitraje en Centroamérica.

Si bien es cierto que la Institución del arbitraje es muy antigua, su máximo desarrollo es alcanzado en materia de Derecho Internacional. Así en el Derecho Internacional Público, los Convenios que gozan de mayor reconocimiento para el surgimiento de la figura del arbitraje son: el Tratado de Arbitraje Obligatorio suscrito en México el 29 de Enero de 1902, el cual sólo fue ratificado por El Salvador y Guatemala en lo que respecta a los países centroamericanos, Protocolo de Ginebra Relativo a Cláusulas de Arbitraje del 24 de septiembre de 1924, y constituyó el primer instrumento jurídico de carácter general, aceptado en diferentes Estados, lo cual significó su entrada en vigencia a nivel internacional (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El Convenio de Ginebra sobre la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras del 26 de septiembre de 1927, el cual fue firmado por Nicaragua pero aún no ha sido ratificado. El Tratado General de Arbitraje Interamericano suscrito en Washington el 5 de enero de 1929 el cual fue firmado por Nicaragua, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá” del 30 de Abril de 1948 (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de Junio de 1958, el Convenio de la Organización de los Estados Americanos: Convenio Interamericano sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975, suscrito en Panamá, el cual entró en vigor el 16 de junio de 1976 (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

De la misma forma, el Código de Bustamante, en el Título X “Ejecución de Sentencias Dictadas por Tribunales Extranjeros” en su Capítulo I; sobre Materia Civil, Artículo 432” expresa íntegramente lo siguiente: “El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores se aplicarán en los Estados contratantes, a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables compondores

siempre que el asunto que les motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite” (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

A la par del Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional Privado va marcando sus huellas a través de Instituciones creadas por empresarios, como la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje comercial (CIAC) con su reglamento (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Producto de la labor de estas instituciones que traen consigo un movimiento generalizado en todos los continentes, surge el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial quien se desempeñó como principal promotor de la Ley Uniforme sobre Arbitraje, aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el 15 diciembre de 1976; pero hasta el 21 de junio de 1985, es que tiene lugar el nacimiento de una ley que regula de forma especial el tratamiento del arbitraje comercial, denominada “Ley Modelo Sobre Arbitraje Comercial Internacional” adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) con el fin de facilitar el comercio internacional (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

La ley modelo persigue la adopción por parte de los Estados con carácter de “Lex Specialis” para lograr la adopción de un procedimiento uniforme sobre el arbitraje comercial internacional (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

En Nicaragua, el arbitraje está reconocido desde 1906 cuando se promulga y entra en vigencia el Código de Procedimiento Civil, regulando el arbitraje en el libro tercero, Título XIII DE LOS JUCIOS POR ARBITRAMIENTO, contenido desde el artículo 950 hasta el artículo 990, mismo que ha sido derogado por la ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje” (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

En Centroamérica se desarrollaron conferencias sobre arbitraje como inicio de la primera fase de un proyecto de Asistencia Técnica dirigido a América Central, organizado por la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association),

Celebradas en Diciembre de 1988 en San José, Costa Rica; en marzo de 1988 en Tegucigalpa, Honduras y en el mismo año en Guatemala (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El Proyecto de Asistencia Técnica, se originó en 1985 con la finalidad de concretar la misma, para contribuir a un proceso evolutivo en relación a la adopción del arbitraje comercial en los Estados de Centroamérica, ante la insuficiencia de disposiciones normativas que regulan los conflictos surgidos en transacciones o negocios comerciales entre particulares, sean éstos personas físicas, jurídicas, o entre el Estado y un Particular, para los cuales surgen el arbitraje comercial (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

### 2.3.- Conceptos de Arbitraje.

En este sentido es posible mencionar que la palabra arbitraje proviene de la etimología *adbiter*, formada por la preposición *Ad* y *Arbiter* que significa: “Tercero que se dirige a dos litigantes para atender sobre su controversia” (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El experto Alfredo Gozaini en su obra: *“forma alternativa para la resolución de conflictos nos dice que es: La personificación de un tercero para resolver los conflictos humanos que parece definir la situación como un proceso donde las partes han convenido poner en manos de esta persona la respuesta al problema que los enfrenta”* (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El Arbitraje es una institución jurídica por la que dos o más personas establecen que cierta controversia específicamente determinada, existente entre ellas, sea resuelta conforme un procedimiento legalmente establecido por terceros a los que se designan voluntariamente y cuya decisión expresamente se somete, ya sea ésta dictada conforme a Derecho a Equidad (Matus, 1998, p 24).

El Arbitraje, es un juicio especial al que se le denomina juicio arbitral o sea, es un proceso que, por ministerio de ley o por convenio de las partes, no se dirime ante los Órganos de la Jurisdicción del Estado, sino ante árbitro (Matus, 1998, p 24).

#### **2.4.- Naturaleza Jurídica del Arbitraje.**

Se puede entender que la naturaleza del arbitraje tiene algunas veces naturaleza pública y en otras netamente privada, por lo que doctrinalmente no ha existido un acuerdo sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, dado que han surgido interrogantes, tales como: si el arbitraje forma parte del Derecho Público al estar incluido dentro del Derecho Procesal, o si forma parte del Derecho Privado al incluirse dentro del Derecho Civil (CNCB, 2006, p 2).

En ese entendimiento existen dos corrientes principales; por un lado, se encuentra la corriente contractualista y, por otro, está la corriente jurisdiccional, las que se describen a continuación (CNCB, 2006, p 2).

La corriente contractualista o privatista pone énfasis en el carácter privado del Arbitraje y en lo que se refiere al origen y a la calidad de los Árbitros, señalando que éstos no son jueces, sino, que son particulares, por lo tanto no son funcionarios del órgano jurisdiccional y, por esta razón, no administran justicia en nombre del Estado, sino que la administran en virtud a la voluntad de las partes (CNCB, 2006, p 2).

Dentro de esta visión el Estado, no puede privar a las partes de escoger el mejor medio que ellas consideren para resolver sus conflictos y la efectividad de estos medios no proviene del Estado, sino de la voluntad de las partes, que, confieren a un tercero la facultad de decidir sobre una controversia y por ello no tienen las características propias de una sentencia judicial, en cuyo cumplimiento se interesa no sólo la parte beneficiada, sino, también el Estado (CNCB, 2006, p 2).

Los partidos de esta postura, propugnan que la relación entre el o los árbitros y las partes, es una relación basada meramente en la autonomía de la voluntad de la cual

gozan los particulares y los árbitros actúan como mero mandatario de las partes (CNCB, 2006, p 2).

La labor del árbitro nunca podrá presentarse como función jurisdiccional porque no cumple con los elementos de la ejecución, es decir, no puede imponer conductas mediante el uso de la fuerza pública que confiere el Estado (CNCB, 2006, p 2).

Por lo tanto para quienes proponen esta teoría, el arbitraje no tiene naturaleza jurisdiccional (CNCB, 2006).

En el contexto opuesto, se presenta la corriente Jurisdiccional o Procesalista que pone énfasis en el carácter público del Arbitraje, porque los árbitros ejercen una función jurisdiccional, sobre la base de que la administración de justicia es de carácter público (CNCB, 2006, p 2).

De acuerdo a esta corriente, si el Estado, por medio de leyes, reconoce a determinado particulares la capacidad de ejercer una función jurisdiccional mediante la institución del Arbitraje, la naturaleza jurídica del mismo no puede ser otra que la función jurisdiccional que los árbitros desempeñan, por lo que éstos son jueces, en virtud no solamente de la designación de las partes, sino en virtud a la ley que emana del Estado como titular de la Jurisdicción (CNCB, 2006, p 2).

Para esta corriente, los árbitros, en un sentido amplio, tienen funciones y actuaciones jurisdiccionales muy parecidas a las de un juez estatal, porque sus resoluciones o Laudos Arbitrales están investidos de la misma fuerza legal que acompaña a las sentencias emanadas del poder judicial, a su vez, los Laudos Arbitrales adquieren la calidad de cosa juzgada y la vía para obtener su cumplimiento corresponde a la ejecución de sentencias judiciales ordinarias, por lo tanto se encuentran en el mismo nivel (CNCB, 2006, p 2).

Respecto a la teoría que señala a los árbitros como simples mandatarios, basta con explicar que, los árbitros, actúan sin representar ni responder a los litigantes, no obstante por haber sido designados por ellos, ya que deben responder

primordialmente a su obligación de juzgar en justicia como valor supremo, es decir que, dado el caso un Árbitro puede, si su sentido de justicia se lo manda, fallar en contra de la parte que lo designó (CNCB, 2006, p 2).

Frente a estas dos corrientes opuestas ha surgido una corriente Ecléctica o Mixta que realiza una fusión dogmática de las teorías anteriores que define la naturaleza jurídica privada procesal del Arbitraje, en ese sentido esta tercera corriente recoge lo mejor de las anteriores denominaciones en primer termino al Arbitraje como una Jurisdicción Convencional, ya que la jurisdicción del Tribunal Arbitral surge a partir de una convención entre los particulares que, como veremos, puede formar parte de un contrato o presentarse mediante un simple convenio arbitral que refrendan las partes (CNCB, 2006, p 2).

La doctrina reconoce tres momentos en el nacimiento de cada proceso arbitral (CNCB, 2006, p 2):

Primero, las partes perfeccionan un contrato o un convenio, significando este momento un negocio que se incluye dentro de la órbita del Derecho Privado.

Segundo, el Árbitro acepta mediante un documento actuar imparcialmente en la controversia, creándose un vínculo entre las partes y el Árbitro, dicho vínculo se asemeja a un mandato, que emana de ambas partes hacia el Árbitro para que conozca la controversia.

Tercero, el Árbitro queda investido de poder por las partes en uso de su autonomía de la voluntad y por la ley para ejercer la actividad pública de juzgar.

Entonces se puede deducir que el Arbitraje no cabe dentro de la esfera del Derecho Privado, porque la doctrina contractualista no alcanza para determinar la naturaleza jurídica del Arbitraje u opuestamente la postura procesalista resulta excesivamente abundante para atribuir la naturaleza jurídica del Arbitraje al Derecho Público. En definitiva, para determinar la naturaleza jurídica del arbitraje es necesario estudiar el

caso en concreto en el cual se desea utilizar, pues no existe consenso en la doctrina de su naturaleza.

## **2.5.- Procedimiento Arbitral Como Mecanismo de Solución De Controversias en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.**

La figura del Arbitraje se hace necesaria cuando se da el quebrantamiento por un Estado Parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana de alguna norma estipulada dentro de los instrumentos jurídicos en materia de integración, generando controversia entre los mismos Estados, las cuales deberán de ser resueltas a través del procedimiento establecido en el Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales en Centroamérica (en adelante el “Mecanismo”).

El mecanismo se aplica a:

- ✓ La prevención o solución de todas las controversias comerciales entre los Estados Partes, relativas a la aplicación o a la interpretación de los Instrumentos, en los que se refiere exclusivamente a sus relaciones de comercio interregional (Argüello, 2009, P 12).
- ✓ Cuando un Estado Parte considere que, una medida vigente o en proyecto de otro Estado es incompatible con las obligaciones derivadas de estos Instrumentos o que, aún cuando es compatible cause anulación o menos cabo a los beneficios del intercambio comercial entre sus territorios que razonablemente se pudieron recibir de su aplicación (Argüello, 2009, P 12).

A través de dicho mecanismo se estimula primeramente a que sean los propios Estados Parte que lleguen a un acuerdo satisfactorio que solucione las diferencias

surgidas entre ellos. En este sentido existe la fase de consulta, Intervención del Consejo de Ministros de Integración Económica y finalmente el Arbitraje.

## **2.6.- Fundamento Legal del Mecanismo de Solución de Controversias en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.**

La creación del Mecanismo de Solución de Controversias en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana tiene su fundamento en la enmienda que fue realizada en el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, figura jurídica suprema de la integración, la enmienda realizada tiene lugar gracias al artículo 15 y 37 del Protocolo de Tegucigalpa que establece:

Le corresponde a la REUNIÓN DE PRESIDENTES conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Corresponde particularmente a la REUNIÓN DE PRESIDENTES:

- a) Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de sus mandatos y decisiones.
- b) Armonizar las políticas exteriores de sus Estados.
- c) Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una Centroamérica unida.
- d) Aprobar, en su caso, las reformas a este Instrumento que se planteen de conformidad con el Artículo 37 del mismo



e) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Instrumento y en los demás Acuerdos, Convenios y Protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.

f) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. Por su parte encontramos que el artículo 37 es complementaria a dicha enmienda y establece: Los proyectos de reformas al Protocolo serán sometidos a consideración de la REUNIÓN DE PRESIDENTES, por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Esta enmienda obedece a la necesidad de extender la posibilidad de conocimiento de las controversias surgidas en el Subsistema Económico dentro del MCCA al Mecanismo, el cual facultó al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) a aprobar las resoluciones No. 106-2003 (COMIECO XXVI) y Resolución No 170-2006 (COMIECO XLIX), siendo esta última la que da lugar al Mecanismo (Argüello, 2009, P 9).

## **2.7.- Resoluciones 106-2003 Y 170-2007 del Consejo de Ministro de Integración Económica Centroamericana.**

Resolución No. 106-2003 (COMIECO XXVI)

Aprobado el 17 de Febrero del año 2003 por el Consejo. El Mecanismo esta inspirado en el entendimiento de Solución de Diferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sigue la misma línea de los mecanismo de solución de controversias contenidos en otros tratados de libre comercio bilaterales (Argüello, 2009, P 13)

Resolución No. 170-2006 (COMIECO XLIX).

En el ámbito regional, el único instrumento de solución de controversias vigente a la fecha por parte de las elaboradas por COMIECO es la resolución No. 170-2006, a fin

de mejorar su funcionamiento y reforzar la certeza y seguridad que su aplicación debe aspirar (Arguello, 2009, P13).

El objetivo del Mecanismo tal como regula el artículo 2 numeral 1: es preservar los derechos y obligaciones que se derivan de los Instrumentos de la Integración Económica, a fin de aportar seguridad y previsibilidad al comercio interregional. Procurando de esta manera que los Estados partes puedan llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los instrumentos de la Integración Económica, es decir, en base a la norma de derecho que respeta los diferentes instrumentos de la Integración. En definitiva la Resolución No. 170-2006 (COMIECO XLIX) es la que rige estableciendo las etapas y procedimiento del proceso Arbitral y a su vez deroga la Resolución No. 106-2003 (COMIECO XXVI).

## **2.8.- Principios del Arbitraje en el Ámbito del Sistema de Integración Económica Centroamericana.**

Los principios son ideas básicas fundamentales, sobre las cuales se reúnen en organización jurídica, éstos son más generales que las normas y muchas veces tienen aceptación y aplicación internacional, por tal razón son aplicadas en mayor medida. Se entiende que la creación de normas se realiza en aplicación a los principios.

El mecanismo con el fin de garantizar la eficacia, coherencia e integridad del sistema, se rige entre otros, por los siguientes Principios (Arguello, 2009, P 15):

**Principio Independencia:** implica que la administración y el neutral (árbitro, conciliador, experto y otro), actúan con total independencia de los Estados, y no como su dependiente o representante;

**Principio Imparcialidad:** garantiza un tratamiento equitativo a las partes de una diferencia (Argüello, 2009, P 15);

**Principio Confidencialidad:** mientras se tramitan los procesos, éstos gozan de un carácter confidencial, lo que genera un ambiente de seguridad y certeza. Se protege además la información confidencial de naturaleza sensible (Argüello, 2009, P 15);

**Principio Agilidad:** los tiempos en los que se deben llevar a cabo las actuaciones son cortos. Por ejemplo, el tribunal debe emitir su Laudo en un plazo no mayor a 90 días. Este principio se refuerza cuando el conflicto versa sobre bienes perecederos, evento en el cual los plazos establecidos en la fase de consultas se reducen a la mitad, cuando así lo solicite el interesado (Argüello, 2009, P 15);

**Principio Cooperación:** abarca lo concerniente al procedimiento arbitral, especialmente en materia probatoria. Así los árbitros estiman que las partes deben colaborar con la prueba. Este deber implica una obligación de informaciones recíprocas sobre elementos susceptibles capaces de influir en el laudo arbitral o en las condiciones de la ejecución (Argüello, 2009, P 15);

De acuerdo con la doctrina los principios e los Métodos de Resolución de Controversias Consisten (Argüello, 2009, P 16):

**Principio de Buena Fe:** es uno de los principios de la lex mercatoria que los árbitros del comercio internacional deben respetar afanosamente. Es una prolongación del principio de buena fe que se le impone a las partes (Argüello, 2009, P 16);

**Principio de celeridad:** es la continuidad de los procedimientos para la solución de las controversias (Argüello, 2009, P 16);

**Principio de idoneidad:** consiste en la capacidad para desempeñarse como árbitro, conciliador o tercera parte (Argüello, 2009, P 16);

**Principio de igualdad:** significa dar a cada Estado Parte las mismas oportunidades de hacer valer sus derechos (Argüello, 2009, P 16);

**Principio de audiencia:** alud a la oralidad de los procedimientos alternativos (Argüello, 2009, P 16);

**Principio de Contradicción:** es la oportunidad de confrontación de las partes (Argüello, 2009, P 16).

Los principios que aporta la doctrina son características fundamentales de los procesos alternos de conflictos, no sólo van dirigidos al órgano que los dirige pues recaen también sobre las partes en este caso los Estados.

A medida que se desarrolla el proceso arbitral del Mecanismo, se van desarrollando de manera pertinente cada uno de estos principios, los cuales procuran revestir la figura del arbitraje de la mayor expresión de legalidad.

## **2.9.- Activación del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales en el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.**

El Mecanismo es activado como ya hemos mencionado con el objeto de preservar derechos y obligaciones que se derivan de los instrumentos de la integración económica, el fin es aportar seguridad y previsibilidad al comercio intrarregional y por último fortalecer la integración en materia Económica Centroamericana (Art. 2 del Mecanismo).

Cuando surja una controversia entre los Estados Partes de la Integración Económica Centroamericana la activación del Mecanismo puede ser invocada, siendo las partes las que buscan una solución viable jurídicamente, estas soluciones deben de respetar y adaptarse en todo momento a los Instrumentos que forman el Andamiaje Jurídico de la Integración Económica Centroamericana (Art. 2 del Mecanismo).

De conformidad con la Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) de 27 de febrero de 2002, las diferencias surgidas en el Subsistema de la Integración Económica como consecuencia de las relaciones comerciales intrarregionales, se someterán al mecanismo de solución de controversias que establezca el Consejo de Ministros de Integración Económica, que contendrá un método de solución alternativo de

controversias comerciales, incluido el arbitraje, cuyas decisiones serán vinculantes para los Estados miembros que intervengan en la respectiva diferencia.

Así mismo, lo regula el artículo 4 numeral 1 del Mecanismo el cual establece “las controversias comerciales que surjan en relación con lo dispuesto en los instrumentos de la integración económica serán resueltas de acuerdo con los procesos establecidos en el presente Mecanismo”.

Es necesario mencionar que las partes pueden realizar la “Elección del Foro” y una vez electo el Foro, dicho Foro no podrá resolver o bien conocer de controversias que surjan en base a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o algún acuerdo o tratado en los cuales forman Parte los Estados que están haciendo uso del Mecanismo. Pero será posible la aplicación del Mecanismo en la nueva controversia (Art. 4 del Mecanismo).

Otro aspecto importante del Mecanismo es la *No retroactividad* del mismo pues este Mecanismo solamente será aplicado luego de la entrada en vigencia del mismo (Art. Transitorio y Único del Mecanismo).

El Mecanismo cuenta con *Reglas Modelo de Procedimiento (RMP)* las cuales se encuentran en Anexo 2 de la Resolución No. 170-2006 (COMIECO-XLIX), las cuales serán aplicadas al Proceso y serán establecidas por el Consejo. Pero existe la posibilidad que los Estados Partes acuerden la aplicación de otras normas, sin perjuicio de su aplicación en lo conducente a otros procesos de solución de controversias (Art. 21 numeral 1,2 del Mecanismo) (Regla No 3 del Mecanismo).

## **2.10.-Sección Nacional del Mecanismo.**

Los Estados al momento de hacer uso del Mecanismo deben hacer uso de la “Sección Nacional”, entendida esta última como la oficina que cada Estado Parte designa como punto de contacto para efectos de este Mecanismo. La designación

de la oficina y de la persona encargada de la misma, serán informado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Art. 7 Mecanismo).

La oficina de Sección Nacional es la institución responsable de los procesos de controversias comerciales en los que se encuentre involucrado el Estado Parte y por ende recibirá todas las notificaciones y convocatorias por la Secretaría.

Como respuesta a las notificaciones la oficina de Sección Nacional presentara la información relacionada con los procedimientos. (Art. 7 Mecanismo).

La oficina de Sección Nacional tiene una función de gran importancia, pues debe notificar los días inhábiles a todos los Estados Partes para efectos del cómputo de plazos del Mecanismo. Los plazos se contarán en días calendarios, pero en aquellos casos en que el último día de un plazo sea un día inhábil para cualquiera de las partes contendientes o su Sección Nacional se encuentre cerrada, entonces se correrá al día siguiente hábil. (Reglas. 9, 14, 17 del Mecanismo)

En definitiva la Sección Nacional, es el punto de referencia de cada Estado Parte en el Mecanismo quienes serán los responsables de facilitar a nivel nacional, la aplicación del presente Mecanismo.

## **2.11.- Función de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).**

La Secretaría trabaja en coordinación con el Consejo para administrar la realización del Proceso del Mecanismo, es decir, que brinda asistencia técnica o bien logística. Pues no posee la competencia para solucionar diferencias (Art. 8 del Mecanismo).

Pero las Reglas Modelos de Procedimiento y el texto del Mecanismo le reconocen una serie de facultades. La Secretaría es la Institución que realizará la recepción de documentación y las correspondientes notificaciones a los Estados Partes. Las

resoluciones, escritos o comunicados, que sean emitidas por el Tribunal serán notificadas por la Secretaría siempre y cuando exista constancia de su recepción.

Desde que los Estados Partes deciden activar el proceso deben de dirigirse ante la Secretaría. Dando a conocer a las Partes, todas las soluciones acordadas mutuamente en las fases de consulta e intervención del Consejo. Finalmente el laudo en caso de haber llegado a un acuerdo satisfactorio en la etapa de consulta y la intervención del Consejo será notificado a las Partes involucradas y comunicará al Consejo (Reglas 11, 13 del Mecanismo).

## **2.12.- Etapa de Consulta.**

La Consulta es la primera fase para dar solución a una controversia, se entiende como fase independiente de solución, pues son los Estados quienes buscan solución satisfactoria. En la solicitud de consulta incluirá las razones para la solicitud, es decir, la identificación de la medida vigente o en proyecto u otro asunto en cuestión y una indicación de los fundamentos jurídicos de la reclamación. Al indicar los fundamentos jurídicos de la reclamación, se tratará de ser lo más preciso posible. De surgir nuevas alegaciones de derecho en la fase de Consulta, así se le hará saber al otro Estado Parte (Art. 9 del Mecanismo).

Se entiende la etapa de Consulta como obligatoria, ya que, es un presupuesto procesal para que se de la intervención del Consejo o el Arbitraje propiamente dicho. Culminada esta fase de Mecanismo, cualquier Estado Parte puede solicitar lo que consideren pertinente.

En la etapa de Consulta resulta interesante la participación una Tercera Parte en las Consultas. Pues un Estado Parte que tenga interés comercial en la controversia, podrá participar en las consultas en su condición de tercera Parte, si lo comunica a la Secretaría dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de Consultas (Art. 12 del Mecanismo).

La Etapa de Consulta goza de características tales como:

- ✓ Voluntariedad: Los Estados Partes al momento de resolver la controversia por iniciativa propia y voluntaria activan la consulta.
- ✓ Flexibilidad: Esta característica viene dada por la independencia de los Estados Partes al momento de negociar y buscar una solución satisfactoria a la controversia.
- ✓ Confidencialidad: El Mecanismo exige que todo lo actuado en esta etapa sea estrictamente confidencial.
- ✓ Celeridad: Es la característica que engloba todo el Mecanismo, pues se pretende que el mismo es ágil y no engorroso.

Puede darse dos sucesos por el Estado Parte Consultado, la primera radica en la recepción de la Consulta por Parte del Estado Consultado el cual con la debida diligencia la examina la Consulta, emitiendo una respuesta en los diez días hábiles siguiente logrando de esta manera un acuerdo satisfactorio. La segunda situación sería que el Estado Parte Consultado emita una respuesta, pero aun con dicha respuesta no se logre un acuerdo, transcurriendo treinta días hábiles luego de la notificación sin llegar a un acuerdo satisfactorio se podrá activar directamente la etapa de arbitraje, pero si el Estado Parte Consultante lo desea podrá pedir la intervención del Consejo (Art 12, 16 numeral 1 inciso a del Mecanismo).

### **2.13.- Intervención del Consejo de Ministros de Integración Económica.**

El Consejo fue creado mediante 37 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), su intervención a diferencia de las consultas es “opcional” pues es el Estado Parte Consultante quien decide solicitar o no la participación del Consejo (Art. 13 del Mecanismo).



Los casos que permiten la intervención el Consejo son:

- ✓ La Parte Reclamada no emitió o contestó en los diez días siguientes a la notificación de solicitud de Consulta, lo que se denomina “Negativa a la Consulta”.
- ✓ Se concluya el término de treinta días posterior a la notificación, sin llegar a un acuerdo.

Habiéndose dado los supuestos anteriores el Estado Parte que solicita la Intervención del Consejo, explicará las razones para la solicitud e incluirá la identificación de la medida vigente o en proyecto u otro asunto en cuestión y una indicación de los fundamentos jurídicos de la reclamación, entregando finalmente la solicitud a la Secretaría por medio de la Oficina de Sección Nacional del Estado Parte (Art. 13 del Mecanismo).

En caso de darse la intervención del Consejo de Ministros (COMIECO), la solución de la controversia también debe ser negociada por los Estados Partes Contendientes, los cuales podrán contar con la colaboración de un tercero imparcial, quien con el fin de que se logre una solución mutuamente satisfactoria de la controversia, podrá acoger una serie de acuerdos alternativos (Mairena, 2008, P11).

Estos terceros imparciales que pueden ser convocados con el objeto de brindar asistencia, dichos terceros podrán:

- ✓ Asesorar técnicamente o crear grupos de trabajo o de expertos que consideren necesarios;
- ✓ Recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación a otros procesos de solución de controversias;
- ✓ Formular recomendaciones;

- ✓ Resolver la controversia, en aquellos casos en los que los Estados Partes Consultantes deciden Someterse a la decisión del Consejo.

En caso de que la controversia entre los Estados Parte no sea resuelta en cualquiera de las dos etapas anteriores (Consulta y Consejo de Ministros), se recurrirá al proceso arbitral, solicitándose para tal efecto, el establecimiento de un Tribunal Arbitral, cuyos miembros son nombrados de común acuerdo por las partes (Mairena, 2008, P12).

Todos los acuerdos alcanzados en la fase de Intervención del Consejo, deberán cumplirse en los plazos indicados en los mismos, que no podrán ser mayores de tres meses o, según el caso, en el plazo prudencial establecido para tal fin. Con el propósito de revisar dicho cumplimiento, el Estado Parte contra el cual se solicitó la Intervención del Consejo presentará ante la secretaría un informe mensual de avance de cumplimiento. Dicho informe será notificado al Consejo y se mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se constate el cumplimiento.

#### **2.14.- Inicio del Arbitraje.**

Agotadas las primeras dos fases Consulta o Intervención del Consejo, sin lograr una respuesta o solución acorde a los intereses de los Estados Partes, el Mecanismo permite hacer uso de la Institución del Arbitraje.

La Solicitud de establecimiento del Tribunal deberá ser presentada a la Secretaría, cualquier Estado Parte podrá solicitar por escrito el establecimiento de un Tribunal Arbitral, en dicha solicitud se deberá expresar las razones que motivó la solicitud, de manera precisa y haciendo uso de los fundamentos jurídicos de la reclamación.

La solicitud de integración de Tribunal Arbitral debe poseer tracto sucesivo, pues debe hacer referencia a las primeras dos fases, las cuales fueron agotadas para iniciar el arbitraje. Por tanto, los Estados Partes solicitarán el Arbitraje en los siguientes casos (Art 16 del Mecanismo):

- ✓ No habiendo respuesta del Estado Parte consultado (Negativa a las Consultas)
- ✓ No habiendo respuesta en un plazo de treinta días posterior a la notificación de solicitud de Consulta o dentro del plazo convenido por los Estados Partes.
- ✓ Cuando la controversia no hubiere sido resuelta dentro de los treinta días siguientes a la reunión del Consejo o cuando la reunión no se hubiere realizado.
- ✓ Cuando no exista consenso entre los miembros del Consejo con respecto a cualquiera de las alternativas previstas.
- ✓ Cuando el asunto no se hubiera resuelto dentro de los treinta días siguientes a aquél en que el Consejo se haya reunido y haya acumulado el asunto más reciente que se le haya sometido.
- ✓ Si el Estado Parte que solicitó la intervención del Consejo considera, con base en el informe mensual de avance de cumplimiento, que no se han tomado medidas destinadas a cumplir con el acuerdo obtenido o bien, que dichas medidas son incompatibles con los instrumentos de la integración económica.

En caso de existir otros Estados Partes consultantes, éstos tendrán un plazo de diez días contados a partir de la notificación de la solicitud de establecimiento del Tribunal Arbitral para manifestar su interés de participar en el arbitraje como reclamante (Art. 16 del Mecanismo).

Si un Estado Parte consultante decide no continuar en el proceso como reclamante o como tercera Parte, a partir de ese momento se abstendrá de iniciar o continuar respecto del mismo asunto, en ausencia de un cambio significativo de las circunstancias económicas o comerciales, cualquier otro proceso de solución de controversias. Transcurrido el plazo de diez días, se podrá establecer la Integración del Tribunal Arbitral (Art. 16 del Mecanismo).

No se podrá solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral para revisar una medida en proyecto.

Dentro del proceso Arbitral puede participar cualquier Estado Parte como tercero en dicho proceso, para lo cual deberá comunicarlo a la Secretaría dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de establecimiento del Tribunal Arbitral (Art 17 del Mecanismo).

Una tercera Parte tendrá derecho a asistir a las audiencias, ser oída por el Tribunal Arbitral, así como recibir y presentar comunicaciones escritas a éste.

Dichas comunicaciones se reflejarán en el Laudo del Tribunal Arbitral. (Art 17 del Mecanismo)

## **2.15.- Lista de Árbitros.**

Cada Estado Parte propondrá para integrar la Lista de Árbitros, a cuatro personas nacionales y dos personas no nacionales centroamericanas, que cuenten con las cualidades y la disposición necesaria para ejercer el rol de Árbitro (Art. 18 del Mecanismo).

Los Árbitros son designados por un período de tres años, y podrán ser reelectos por períodos iguales. No obstante, a solicitud de uno de los Estados Parte, y de común acuerdo con los otros Estados Partes, podrá revisarse la Lista antes que transcurra dicho plazo. En este último caso, los nuevos miembros de la Lista ejercerán sus funciones por el tiempo restante para el cumplimiento del período original, sin perjuicio de ser reelectos (Art. 18 numeral 3 del Mecanismo).

Antes de finalizar el período de los Árbitros electos, se debe realizar un proceso de elección de nuevo proceso de aprobación de lista. Para ello, los Estados Parte deberán enviar a la Secretaría sus candidatos antes del vencimiento del período, o

en su caso, una manifestación expresa de su deseo de reelegir a quienes ya estén designados (Art. 18 numeral 4 del Mecanismo).

Los Estados Partes dispondrán de hasta treinta días, para expresar por escrito, a través de la Secretaría, su reacción sobre los mismos. En caso de haber reacción negativa, tendrá hasta treinta días para presentar nueva propuesta (Art. 18 numeral 5 del Mecanismo).

En caso de no haber reacción negativa, se tendrá como aprobada la Lista con los candidatos a los que no se haya formulado reacción negativa dentro de los plazos indicados.

Los miembros de la Lista continuarán en el desempeño de sus labores aún cuando hubiere concluido el período para el que fueron designados, mientras no se haya realizado una nueva designación. Si al vencimiento del período de tres años para el que los miembros de la Lista fueron designados, y uno de ellos se encuentra nombrado como árbitro en un proceso en curso, éste continuará desempeñando su función en ese proceso específico hasta que concluya el mismo (Art. 18 numeral 8,9 del Mecanismo).

## **2.16.- Cualidades de los Árbitros.**

Para cumplir la función de Árbitro éste debe de cumplir una serie de requisitos y cualidades intelectuales, ya que, debe poseer conocimientos especializados o experiencia en Derecho, Comercio Internacional, y otros asuntos relacionados con los instrumentos de la Integración Económica, o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales (Art 19 del Mecanismo).

Todo Árbitro debe reconocida objetividad, probidad, fiabilidad y buen juicio, en tal sentido su actuar debe ser acorde al Código de Conducta establecido por el Consejo.

Es de gran importancia mencionar que las personas que hubieren intervenido en una controversia, en la etapa de intervención del Consejo, no podrá ser Árbitro para la misma controversia.

En definitiva los Árbitros deben de cumplir cualidades indispensables para el buen funcionamiento del Mecanismo, logrando la máxima expresión de legalidad, por tal razón el Código de Conducta establece:

Todo candidato, miembro y ex-miembro, será honesto, evitará todo conflicto de intereses directo e indirecto, respetará la confidencialidad de su nombramiento durante el proceso y de las actuaciones en los procesos y guardará un alto nivel de conducta de manera que, mediante la observancia de esas normas de conducta, sean preservadas la integridad e imparcialidad del sistema de solución de controversias (Art 2 del CCM).

Los candidatos a miembros del Tribunal Arbitral deberán realizar una declaración inicial ante la Secretaría sobre cualquier interés personal o bien financiero que pueda afectar su independencia o imparcialidad en el procedimiento de manera que, sean preservadas la integridad e imparcialidad del Sistema de Solución de Controversias (Art. 3 del CCM).

Además de la independencia e imparcialidad de los Árbitros, éstos deben evitar ser influenciado por intereses propios, presiones externas, consideraciones políticas, presiones públicas, lealtad a una Parte Contendiente o temor a la crítica. Por tal razón, ningún miembro podrá, directa o indirectamente, contraer obligación alguna ni aceptar beneficio alguno que pudiera interferir con el cumplimiento de sus deberes (Art. 5 del CCM).

## **2.17.- Procedimiento para Recusar a los Árbitros.**

Los Árbitros serán perfectamente seleccionados de la Lista de Árbitros y cualquier Parte Contendiente podrá recusar, sin expresión de causa y en el marco de la

reunión de integración, a cualquier persona que no figure en la citada Lista y que sea propuesta como integrante del Tribunal Arbitral por una Parte contendiente. (Art. 20 numeral 2)

Si la recusación no se manifiesta al momento de integrar el Tribunal, se podrá realizar una vez integrado dicho Tribunal, en donde una Parte contendiente podrá recusar a un Árbitro de la Lista cuando concurren circunstancias que den lugar a una duda justificable con respecto a la imparcialidad o independencia del mismo o cuando considere que ha incurrido en una violación del Código de Conducta. El Procedimiento para recusar a un árbitro se realizará de la siguiente manera (Regla 27 del Mecanismo):

- ✓ La recusación de un Árbitro que figure en la Lista, se hará por escrito, expresando concretamente la causa de la recusación y los medios de prueba. Este escrito lo presentará la Parte contendiente a la Secretaría dentro de los cinco días siguientes a la notificación del nombramiento o dentro de los cinco días siguientes a las circunstancias que dieron lugar a la recusación fuesen conocidas por cualquiera de las Partes contendientes.
- ✓ Al recibir la Notificación de la recusación, las Partes contendientes realizarán consultas y podrán convenir en aceptar la recusación; si existe un acuerdo, destituirán a ese Árbitro. El Árbitro recusado también podrá renunciar a su cargo, sin que la renuncia implique la aceptación de la validez de los motivos de la recusación.
- ✓ Sólo por nuevos motivos o por ignorar los existentes, una Parte contendiente podrá iniciar un procedimiento de recusación contra uno de los Árbitros nombrados, siempre y cuando éste se justifique dentro de los términos ya señalados.

## **2.18.- Nombramiento de Árbitros Suplentes.**

El Mecanismo prevé la posibilidad de que un Árbitro no acepte su designación, fallece, renuncia o es destituido, por lo cual las Partes Contendientes procurarán nombrar en el marco de la reunión de integración de Tribunal Arbitral, Árbitros suplentes para los casos antes mencionados (Art 20 inc. h del Mecanismo).

Complementariamente a lo establecido por el Mecanismo, las Reglas Modelo de Procedimiento del mismo establecen que se procederá con una nueva designación de conformidad con el procedimiento establecido, debiendo celebrarse la reunión de integración dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la solicitud que presente la Parte contendiente interesada en nombrar un nuevo Árbitro. Al nombrar al Árbitro sustituto, el Tribunal Arbitral decidirá a su entera discreción si todas o parte de las audiencias anteriores serán repetidas (Regla 24 del Mecanismo).

Es oportuno mencionar que cualquier Árbitro que decida renunciar al cargo, lo deberá notificar por escrito al Presidente del Tribunal Arbitral o en su defecto a la Secretaria, quien informará inmediatamente de ello a las Partes involucradas (Regla 25 del Mecanismo).

## **2.19.- Integración del Tribunal Arbitral.**

Una vez que se han designado a los Árbitros, las Partes contendiente deberán reunirse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la solicitud de establecimiento de tribunal para acordar su integración, salvo que acuerden un plazo mayor (Art 20 del Mecanismo).

El Tribunal estará integrado por tres miembros, los cuales han sido seleccionados y aprobados por las Partes. Cada Parte contendiente seleccionará un árbitro de la Lista, quien no podrá tener la nacionalidad del Estado Parte que lo propone. En el



marco de de la reunión de integración, las Partes contendientes procurarán acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, quien no podrá ser nacional de cualquiera de los Estados Parte (Art. 20 de Mecanismo).

Si una Parte Contendiente no designa un Árbitro dentro del plazo antes mencionado, éste se designará dentro del día hábil siguiente al vencimiento de dicho plazo, mediante sorteo realizado por la Secretaría, entre los miembros de la Lista que no sean nacionales de la respectiva Parte contendiente (Art 20 del Mecanismo).

Una vez nombrado y aceptado el cargo por parte de todos los Árbitros nombrados, la secretaría comunicará a todos los miembros del Tribunal Arbitral y a las Partes involucradas dicho hecho. El Tribunal Arbitral notificará su constitución a las Partes involucradas en la diferencia dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la Secretaría que todos los Árbitros han aceptado su nombramiento. Dicha notificación incluirá el Acta de Misión (Regla 28 del Mecanismo).

El Acta de Misión del Tribunal será: *“Examinar, a luz de las disposiciones aplicables de los instrumentos de la integración económica y del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica, asunto sometido a su consideración en los términos de la solicitud para el establecimiento del tribunal arbitral y emitir el Laudo”*.

El Tribunal Arbitral emitirá un calendario de trabajo considerando que dentro de los primeros sesenta días a partir de su constitución, estará a disposición de las Partes involucradas para recibir sus comunicaciones escritas y para la celebración de audiencias, y que los últimos treinta días del plazo con que cuenta para emitir su Laudo, serán destinados exclusivamente al análisis de la información disponible, sin que las Partes involucradas en la diferencia puedan presentar información adicional, salvo que el Tribunal Arbitral de oficio o a petición de Parte contendiente lo considere necesario (Art 21 numeral 1 inc. 3 del Mecanismo).

## **2.20.- Funcionamiento del Tribunal Arbitral.**

Dicho funcionamiento lo rigen las Reglas Modelos de Procedimiento las cuales forman el anexo II de la Resolución 179-2006 (COMIECO-XLIX).

Las reuniones del Tribunal Arbitral serán presididas por su Presidente quien, por delegación de los miembros del tribunal arbitral, tendrá las facultades de tomar decisiones administrativas y procesales. El Tribunal está facultado para desempeñar sus funciones utilizando cualquier medio de comunicación tales como: teléfono, transmisión por fax o los enlaces por computadoras, esto ayuda a que el Mecanismo sea Ágil (Regla 30 del Mecanismo).

El Tribunal en el cumplimiento de sus funciones podrá contar con apoyo de un asistente. Pero al momento de realizar las deliberaciones, únicamente participan los Árbitros, salvo que permitan la presencia, durante dichas deliberaciones, de su asistente, personal de la Secretaría, intérpretes o traductores (Regla 31, 32 del Mecanismo).

Cuando se plantee una cuestión de procedimiento que no esté regulada por las Reglas Modelos de Procedimiento, el Presidente del Tribunal Arbitral podrá adoptar en los efectos de ese arbitraje únicamente, el procedimiento correspondiente, siempre y cuando no sea incompatible con las disposiciones del Mecanismo y las Reglas de Procedimiento. Cuando se adopte tal procedimiento, el Presidente del Tribunal Arbitral lo notificará inmediatamente a las Parte involucradas en el Arbitraje, así como también a los demás miembros del Tribunal Arbitral.

Si bien el Mecanismo establece plazos específicos para llevar el proceso Arbitral, previa consulta a las Partes Contendientes, el Tribunal Arbitral podrá modificar los plazos procesales y realizar cualquier otro ajuste procesal o administrativo que sea necesario en el procedimiento, como sería por causa de sustitución de un Árbitro o

cuando las Partes contendientes deban responder por escrito a las preguntas que el Tribunal Arbitral les formule (Regla 34 del Mecanismo).

#### **2.21.- Disponibilidad y Confidencialidad de la Información.**

El Tribunal Arbitral guardará confidencialidad en tanto dure la tramitación del proceso; sus actuaciones y deliberaciones siempre tendrán carácter confidencial. Los informes, las resoluciones y el Laudo del Tribunal Arbitral se redactarán sin que se halle presentes las Partes involucradas (Regla 62 del Mecanismo).

Cada Parte involucrada, el Tribunal Arbitral y la Secretaría, asegurarán que sus representantes, asesores, funcionarios y en general, toda persona que tenga acceso a la información, mantenga la confidencialidad de las audiencias, así como todos los escritos y las comunicaciones presentados en el marco del proceso (Regla 63 del Mecanismo).

Las Partes contendientes podrán revelar a sus asesores la información relacionada con el proceso ante el Tribunal Arbitral que consideren necesaria para la preparación del caso, asegurando siempre que esos asesores mantengan la confidencialidad del proceso (Regla 64 del Mecanismo).

La Secretaría tomará las providencias razonables para asegurar que los expertos, los estenógrafos y cualquier contratado por ella, mantenga la confidencialidad del proceso. Una vez concluido el proceso, el expediente y el Laudo serán publicados, salvo la información que haya sido identificada por la Parte contendiente como información confidencial sensible (Regla 65,66 del Mecanismo).

## 2.22.- Información Confidencial Sensible.

El Mecanismo o bien las Reglas Modelos de Procedimiento no se entenderán en el sentido de obligar a un Estado Parte a proporcionar o a dar acceso a información confidencial de naturaleza sensible. La información confidencial sensible es aquella cuya divulgación pudiese afectar el cumplimiento de las leyes, que fuera contraria al interés público o que pudiese perjudicar el interés comercial legítimo de empresas públicas o privadas (Regla 67, 68 del Mecanismo).

En el marco de los procesos, cuando los Estados Partes entreguen un documento, deberán identificar claramente la información confidencial sensible; para ello ejercerán la máxima moderación. En el caso de que dicha información sea presentada en una audiencia, la Parte contendiente deberá informarlo al Tribunal, para que éste tome las previsiones correspondientes (Regla 69 del Mecanismo).

Las personas que tengan acceso a la información confidencial sensible deberán tomar todas las precauciones necesarias para salvaguardar dicha información y únicamente la podrá utilizar para los fines del proceso. En caso de que esta divulgue la información confidencial sensible, estará sujeta a las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes (Regla 70 del Mecanismo).

El Tribunal Arbitral no deberá divulgar la información confidencial sensible en su Laudo, pero puede anunciar conclusiones sacadas de esa información. Para ese efecto, cuando una Parte contendiente le haya atribuido a alguna información la naturaleza sensible, esa parte deberá presentar un resumen que pueda ser utilizado por el Tribunal Arbitral para dictar Laudo (Regla 71 del Mecanismo).

Los miembros o ex – miembros por su parte, se abstendrán de revelar o utilizar información relacionada con el proceso o adquirida durante el mismo, que no sea del dominio público, excepto para propósitos del proceso (Art. 7 numeral 1 CCM)

De igual manera los miembros o ex-miembros nunca revelarán las deliberaciones o cualquier opinión de un miembro sobre el proceso, excepto cuando una ley lo disponga o una autoridad judicial lo requiera (Art. 7 numeral 3,4 CCM)

### **2.23.- Escrito de Alegatos.**

El Estado Parte reclamante entregará a la Secretaría su escrito inicial el que figura como demanda a más tardar diez días después de la notificación de la constitución del Tribunal Arbitral, luego en un plazo de veinte días posteriores a la notificación del escrito inicial o demanda la Parte demandada entregará a la Secretaría su escrito de contestación. Por su parte la Secretaría deberá remitirlo de la manera más expedita posible a las otras Partes involucradas y al Tribunal Arbitral (Reglas 35, 36,37 del Mecanismo).

Los errores tipográficos menores que contengan una solicitud, aviso, escrito de alegato o cualquier otro documento relacionado con el proceso ante el Tribunal Arbitral, podrán ser corregidos mediante entrega de un nuevo documento que identifique con claridad las modificaciones realizadas, a menos que el Tribunal Arbitral considere permitir tal enmienda por la tardanza de la Parte involucrada al hacerlo (Regla 38 del Mecanismo).

Hay que mencionar que el Tribunal Arbitral deberá fijar su calendario de trabajo, a más tardar en la fecha en la que se debe presentar la contestación del escrito inicial. En el calendario, se otorgará el tiempo suficiente a las Partes involucradas para que se preparen para las diversas actuaciones. En él se deberán fijar plazos precisos que se han de respetar para la presentación de las comunicaciones escritas de las Parte involucradas y la celebración de audiencias. El Tribunal Arbitral podrá modificar el calendario de trabajo, lo que deberá ser notificado con la suficiente antelación a las Partes contendientes (Regla 39 del Mecanismo).

## 2.24.- Presentación de la Prueba en el Mecanismo.

Los Estados contendientes ofrecerán la prueba con el escrito inicial y de Constatación. No obstante, de manera excepcional podrán presentar pruebas adicionales en la audiencia, siempre que la ofrezcan y la pongan a disposición de la otra Parte contendiente a más tardar cinco días antes de la realización de dicha actuación y que el Tribunal Arbitral la considere pertinente durante la audiencia. En todo caso, la Parte contendiente interesada podrá referirse a esta prueba en su escrito complementario de alegatos (Regla 55 del Mecanismo).

El Estado Parte que afirme que una medida de otro Estado Parte es incompatible con las disposiciones de los instrumentos de la integración económica tendrá la carga de probar esa incompatibilidad (Regla 56 del Mecanismo).

El Estado Parte que afirme que una medida esta sujeta a una excepción conforme a los instrumentos de la integración económica, tendrá la carga de probar que la excepción es aplicable (Regla 57 del Mecanismo).

La presentación de la prueba como carga para las Partes, es vista como una obligación que debe de cumplir el Estado demandante cumpliendo con el principio *“Quien acusa debe probarlo”*.

El Tribunal podrá solicitar información y asesoría técnica, pero antes de la fecha de selección de las personas o de las Instituciones que brindarán información o asesoría técnica, las Partes contendientes podrán someter al Tribunal arbitral observaciones escritas sobre las cuestiones de hecho respecto de las cuales deban opinar dichas personas o instituciones.

Ningún Tribunal Arbitral, ya sea de oficio o a petición de una Parte contendiente, podrá recabar información o solicitar asesoría técnica de las personas o instituciones que estime pertinente, después de transcurridos diez días de la fecha de la ultima audiencia.

El Tribunal no podrá seleccionar como asesor técnico o solicitar información a una persona o institución que tenga un interés financiero o particular en el asunto, o cuyo empleador, socio, asociado o miembro de su familia tenga

## 2.25.- Audiencias del Mecanismo.

Las Reglas Modelo de Procedimiento que posee el Mecanismo regulan todo lo relacionado con las audiencias, se establece que las audiencias se celebrarán en la capital de la Parte demandada, salvo que las Partes acuerden celebrarlas en otro lugar. El Presidente fijará la fecha, lugar y hora de la audiencia, en consulta con las Partes contendientes, con los demás miembros del Tribunal y con la Secretaría (Reglas 40, 41 del Mecanismo).

El Tribunal Arbitral podrá celebrar audiencias adicionales cuando lo considere necesario, y en todas las audiencias es preciso que estén presentes los Árbitros, pues “***so pena de nulidad***” de los actos y decisiones que en ella se ejecuten o adopten de faltar algún miembro del jurado (Regla 43 del Mecanismo).

Además de los Árbitros, podrán estar presentes en la audiencia los representantes de las Partes involucradas y los funcionarios que éstos designen, funcionarios de la Secretaría, intérpretes o traductores y estenógrafos y asistentes del Tribunal Arbitral (Regla 44 del Mecanismo).

Las Partes, a más tardar tres días antes a la fecha de la audiencia, integrarán a la Secretaría, una lista de quienes alegarán oralmente en la audiencia, así como de los demás integrantes de su delegación. Las partes contendientes podrán objetar con justificación de causa, la presencia de alguno de los miembros de la delegación en la audiencia, objeto que el Tribunal Arbitral resolverá en ese mismo momento (Regla 44 del Mecanismo).

El Tribunal Arbitral, concediendo tiempo igual a la Parte reclamante y a la Parte demandada, dirigirá la audiencia de la siguiente manera (Regla 46 del Mecanismo).

A. Alegatos Orales:

- a. Alegatos de la Parte reclamante.
- b. Alegatos de la Parte Demandada.
- c. Presentación de la tercera Parte, si la hubiere.

B. Réplicas y Contrarréplicas:

- a. Replica de la Parte reclamante.
- b. Contrarréplica de la Parte demandada.

En cualquier momento de la audiencia, el Tribunal Arbitral podrá formular preguntas a las Partes Involucradas, la Secretaría adoptará las medidas conducentes para que la audiencia se haga constar por escrito y, tan pronto como sea posible, entregará a las Partes involucradas y al Tribunal Arbitral, copia de la transcripción de la Audiencia (Regla 49 del Mecanismo).

El Tribunal Arbitral podrá formular preguntas escritas a cualquiera de las Partes contendientes. El Tribunal Arbitral entregará las preguntas escritas a la Parte contendiente a quien estén dirigidas a través de la Secretaría. De la manera más expedita posible, la Secretaría dispondrá la entrega de las copias de las preguntas a cualquier otra Parte involucrada (Regla 49 del Mecanismo).

La Parte contendiente a la que el Tribunal Arbitral formule preguntas escritas entregará su respuesta escrita a la Secretaria dentro del Plazo concedido para tal efecto por el Tribunal Arbitral. De la manera más expedita posible, la Secretaría dispondrá la entrega de las copias de la respuesta al Tribunal Arbitral y a las Partes involucradas. Durante los cinco días siguientes a la fecha de su notificación, las Partes contendientes tendrán el derecho de formular observaciones escritas al documento de respuesta (Regla 50 del Mecanismo).

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la realización de la audiencia, las Partes contendientes podrán entregar a la Secretaría un escrito complementario de alegatos, sobre asuntos que hayan surgido durante la audiencia o sobre la prueba



adicional. La Secretaria inmediatamente remitirá el documento al Tribunal Arbitral y una copia a las otras Partes involucradas (Regla 51 del Mecanismo).

#### **2.26.- Procedimiento en caso de Rebeldía.**

Si la Parte demandada no presenta un escrito de constatación dentro del plazo establecido, el cual es de veinte días luego de haber recibido la notificación de la demanda o en su defecto por el Tribunal Arbitral sin mostrar causa justificada para dicha falta, el Tribunal Arbitral la declarará en rebeldía y procederá con el Arbitraje tomando en cuenta la información presentada y las declaraciones formuladas hasta ese momento (Regla 58 del Mecanismo).

Si la Parte demanda, debidamente notificada conforme a las disposiciones del Mecanismo y las Reglas Modelos de Procedimiento, no compareciese a una audiencia sin mostrar causa justificada, el Tribunal Arbitral procederá con el Arbitraje tomando en cuenta la información presentada y las declaraciones formuladas hasta ese momento (Regla 59 del Mecanismo).

Si la Parte demandada, debidamente instada a presentar las pruebas solicitadas, no lo hiciere sin causa justificada dentro del tiempo establecido por las Reglas Modelos de Procedimiento o bien las establecidas por el Tribunal Arbitral, éste podrá fallar a su discreción de conformidad con la información presentada y las declaraciones formuladas (Regla 60 del Procedimiento).

Pero si la Parte demandada declarada en rebeldía, prueba a total satisfacción del Tribunal Arbitral las causas por las cuales no pudo realizar determinada acción, como las antes mencionadas, éste suspenderá la declaratoria de rebeldía y le concederá un termino perentorio (termino definitivo) que crea suficiente para que realice las actividades correspondientes (Regla 61 del Procedimiento).

## 2.27.- Laudo Arbitral.

Concluidas todas la etapas de audiencias que posee el Mecanismo habiendo sido presentado los respectivos alegatos orales, documentos a modo de prueba en el proceso, el Tribunal Arbitral tiene la tarea de resolver la controversia o conflicto entre los Estados Partes, para lo cual emitirán el Laudo, el cual debe ser emitido dentro de los noventa días siguientes a la notificación de la constitución del mismo.

El Tribunal basará su Laudo en las disposiciones aplicables de los instrumentos de la integración económica, los alegatos y argumentos presentados por las Partes contendientes y en cualquier información que haya recibido (Art. 23 del Mecanismo).

Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, dentro de los noventa días siguientes a la notificación de la constitución del tribunal arbitral, o cualquier otro plazo establecido en las Reglas Modelo de Procedimiento, el Tribunal Arbitral emitirá un Laudo que contendrá:

- ✓ Las conclusiones de hecho;
- ✓ La determinación sobre si la medida en cuestión es incompatible con las obligaciones derivadas de los instrumentos de la integración económica, o es causa de anulación o menoscabo en el sentido del numeral 1, literal c) del artículo 3;
- ✓ Una referencia a las comunicaciones recibidas de terceras Partes, cuando las haya;
- ✓ La declaración de condena en costas, remuneración y pago de gastos de los Árbitros y asesores;
- ✓ Los Árbitros razonarán su voto por escrito sobre cuestiones respecto de las cuales no exista decisión unánime.

El Laudo Arbitral será publicado por las Partes contendientes, dentro de los treinta días siguientes a su notificación. La falta de publicación por una o más de las Partes contendientes no perjudica la obligatoriedad del mismo (Art. 23 numeral 5 del Mecanismo).

No es permitido al momento de la publicación revelar la identidad de los Árbitros que hayan votado con la mayoría o la minoría. El Laudo tendrá carácter de resolución firme, ya que no admitirá recurso alguno.

## **2.28.- Cumplimiento del Laudo.**

El Mecanismo deja claro que el Laudo no Permite recurso alguno, por lo cual el Laudo produce efecto de cosa juzgada material y formal dando una solución definitiva a la controversia, para que la misma no vuelva a ser planteada como conflicto.

Por los efectos que llega a producir el Laudo es que el mismo se vuelve obligatorio para las Partes contendientes en los términos y dentro de los plazos que éste ordene, que no excederá de seis meses a partir de su notificación, salvo que las misma acuerden otro plazo (Art. 24 numeral 1 del Mecanismo).

Cuando el Laudo del Tribunal declare que la medida es incompatible con los instrumentos de la integración económica, la Parte demandada se abstenga de ejecutar la medida o la derogará (Art.24 numeral 2 del Mecanismo).

Cuando el Laudo del Tribunal Arbitral declare que la medida es causa de anulación o menoscabo en el ámbito de aplicación determinará el nivel de anulación o menoscabo y podrá sugerir, si las Partes contendientes así lo solicitan, los ajustes que considere mutuamente satisfactorios para los mismos (Art. 24 numeral 3 del Mecanismo).

## 2.29 Casos sobre la participación de Nicaragua en el Mecanismo.

Nicaragua ha hecho uso del mecanismo de solución de controversias comerciales, que se establece mediante la Resolución 170-2006, emitida por el Consejo de Ministro de Integración Centroamericana (COMIECO).

A continuación se presenta uno de los casos en el cual ha participado Nicaragua y que instancia agoto dentro del mecanismo:

Expediente MSC – 02- 03

Partes: Solicitud de celebración de consultas presentadas por Nicaragua a Honduras.

Descripción: Se alega la aplicación de medidas que demoran la certificación de mataderos.

Resultado: Acuerdo suscrito entre las partes (etapa de consulta).

Las consultas entre ambos países se desarrollaron en el marco del mecanismo de solución de controversias comerciales en Centroamérica, ya que Honduras paralizó la importación de carne nicaragüense por no cumplir con las normas sanitarias y fitosanitarias, pese a que Nicaragua ya contaba con certificación de Estados Unidos y Japón.

La etapa de consulta funciona a partir de una queja formulada por los afectados, la cual debe contar con el respaldo del Gobierno, si se trata de productos perecederos el proceso puede durar hasta cuatro meses.

En la etapa de consulta Nicaragua alegó que Honduras violó el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del Tratado de Integración Económica C.A. y del Tratado Sobre Aranceles (GATT).

Por lo cual Nicaragua y Honduras se comprometieron a realizar una revisión a los sistemas técnicos sanitarios y fitosanitarios utilizados en la trazabilidad del producto hasta el consumidor final, con el objetivo de certificar los mismo, dicha certificaciones se llevaron a cabo por los inspectores hondureños que dieron la aprobación a los productos reactivándose las exportaciones de carne de Nicaragua a Honduras

Honduras tuvo que acceder finalmente a dejar ingresar la carne, una vez obtenido los resultados de las inspecciones y corregidas las fallas encontradas en las instalaciones industriales Nicaragüenses.

Sin embargo dentro de los laudos más actualizados que el mecanismo de solución de controversias presenta, no figura como parte Nicaragua, pero si países miembros de la integración tales como:

EXPEDIENTE MSC- 04- 04

Partes: Solicitud de celebración de consulta presentada por Guatemala a Costa Rica.

Descripción: Se alega la aplicación de medidas que afectan a productos lácteos guatemaltecos.

Resultado: Laudo\* emitido por el Tribunal Arbitral.

El problema de los productos lácteos guatemaltecos y el Gobierno de Costa Rica surgió debido a que este último negó la procedencia de origen a los productos nacionales de Guatemala aduciendo que parte de su contenido provenía de materia prima de fuera de la región centroamericana.

Lo anterior provocó que los productos lácteos Guatemaltecos tuvieran que pagar impuestos de importación de 65 por ciento contra el 15 por ciento que pagan todos los demás productos lácteos regionales.

En respuesta a lo planteado por Costa Rica, Guatemala expone la teoría de La regla “minimis” establecida en el artículo 11 del reglamento centroamericano sobre el

origen de las mercancías, que especifica que un producto que utilice materias primas que no sean de la región pueda calificar como originario si este incorpora en su elaboración un mínimo de siete por ciento de esos materiales no originarios.

Dicha teoría del “minimis” fue acogida por el tribunal arbitral del Consejo de Ministro de Integración Económicas (COMIECO) y expuesta en la resolución numero 137-2005, que determino que los insumos de los productos lácteos guatemaltecos se entenderán como originario (ver resolución en anexos).

### **2.30.- Suspensión de Beneficios.**

El Estado Parte que incumpla lo determinado en el Laudo será sancionado con la suspensión de beneficios por el Estado afectado, suspensión que será equivalente al daño sufrido.

El Mecanismo establece que vencido el término para cumplir lo que manda el Laudo, la Parte reclamante podrá aplicar de manera inmediata la suspensión de beneficios, lo que se notificará a la Parte demandada por medio de la Secretaría, indicando además, el nivel de dicha suspensión (Art 25 numeral 1 del Mecanismo).

La Parte reclamante procurará primero suspender los beneficios dentro del mismo sector o sectores que se vean afectados por la medida, o por otro asunto que el Tribunal arbitral haya considerado incompatible con las obligaciones derivadas de los instrumentos de la integración económica, o que haya sido causa de anulación o menoscabo. Pero si aun la Parte reclamante considera que no es factible ni eficaz suspender beneficios en el mismo sector o sectores, ésta podrá suspender beneficios en otros sectores (Art 25 numeral 2 inc. a, b del Mecanismo).

Si la Parte demandada considera que ha cumplido con los términos del Laudo, o que el nivel de beneficios que se ha suspendido es manifiestamente excesivo, ésta podrá solicitar que la Secretaría convoque al Tribunal Arbitral para la Suspensión de

Beneficios, de manera tal que dicho Tribunal pueda examinar el asunto (Art 25 numeral 3 del Mecanismo).

El Tribunal se constituirá con los mismos Árbitros que conocieron el asunto. Si esto no fuera posible, la Secretaría se lo informará a las Partes contendientes para que éstas puedan proceder a una nueva Integración de Tribunal Arbitral, debiendo realizarse la reunión de integración dentro de los cinco días siguientes a la notificación realizada por la Secretaría (Art 25 numeral 3 del Mecanismo).

En todo caso, el Tribunal se volverá a constituir a más tardar dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud, y emitirá su decisión dentro de los treinta días siguientes a su constitución, salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa (Art 25 numeral 3 del Mecanismo).

La decisión del Tribunal establecerá si la Parte demandada ha cumplido con los términos del Laudo, o si el nivel de beneficios que la Parte reclamante ha suspendido es manifiestamente excesivo, en cuyo caso fijará el nivel de beneficios que considere de efecto equivalente (Art 25 numeral 4 del Mecanismo).

La suspensión de beneficios durará hasta que la Parte demandada cumpla con el Laudo o hasta que las Partes contendientes lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio de la controversia. Si la Parte demandada está conformada por dos o más Estados Partes, y uno o varios de ellos cumplen con el Laudo, o llegan a un acuerdo mutuamente satisfactorio con la Parte reclamante, esta última no podrá aplicar la suspensión de beneficios a los que hayan cumplido (Art 25 numeral 5 del Mecanismo).

En caso de que la Parte contendiente a quien corresponda sufragar las remuneraciones de los Árbitros y demás gastos incurridos dentro del proceso arbitral no lo haya hecho dentro del plazo concedido para tal fin, la otra Parte contendiente podrá, por constituir ello un incumplimiento del Laudo, suspender beneficios por el monto adeudado (Art 25 numeral 7 del Mecanismo).

### 2.31.- Valoración Crítica del Mecanismo de Solución de Controversias en Centroamérica.

La creación del Mecanismo nace por la necesidad de hacer usos de métodos alternos de solución de controversias, para contar con mecanismos modernos, ágiles, efectivos, vinculantes y con un mayor nivel de calidad, por lo que se puede interpretar que existía cierta inconformidad con los ya existentes dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Por las necesidades antes mencionadas, la Reunión de Presidentes, órgano competente para realizar reformas o enmiendas al Protocolo de Tegucigalpa según los artículos 15 inciso d. y 37 de dicho instrumento, decide dar respuesta a las necesidades reformando el Protocolo de Tegucigalpa e incorporando métodos alternos para solucionar conflictos, entre los cuales figura el arbitraje.

Lo cual no fue algo nuevo, pues el arbitraje como método de solución de conflictos, ya existía dentro del SICA bajo la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, método que sería utilizado a petición de parte.

La innovación de la reforma al Protocolo de Tegucigalpa está dada por el hecho de que los nuevos métodos (arbitraje) creados, estarían a cargo del Consejo de Ministro de Integración Económica (COMIECO), quien establecería el procedimiento de los mismos para dirimir conflictos de carácter comercial, y serían vinculantes para los Estados Partes.

Los sujetos que pueden hacer uso del nuevo Mecanismo son los Estados Partes del Sistema de Integración, para solucionar conflictos de naturaleza comercial entre los mismos.

Una problemática que presenta el nuevo mecanismo, está dada por el vacío al momento de determinar lo que se puede entender por conflictos comerciales, ya que no es claro en este sentido el Mecanismo. Por lo tanto surge la duda si por el objeto



comercial estaremos refiriéndonos a todas las relaciones comerciales que pueden existir mediante los instrumentos de la integración económica.

La posible cláusula compromisoria dentro de este mecanismo, la encontramos en la aprobación por los Estados Partes al Protocolo de Guatemala, otorgándoles facultades al Consejo de Ministros entre ellas la regulada en el artículo 55 numeral 2 de dicho instrumento que reza: “Las resoluciones son los actos obligatorios mediante los cuales, el Consejo de Ministros adoptará decisiones referentes a asuntos internos del Subsistema, tales como los relativos al funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institucionales de la integración económica”.

Al ser de carácter obligatorios las resoluciones emitidas por el Consejo, los Estados Partes deben acatar la Resolución No. 170-2006, (COMIECO-XLIX), aprobada el 28 de Julio del 2006, la que establece el nuevo mecanismo que desemboca en el arbitraje.

El reconocimiento legal del Mecanismo se determina en nuestra legislación, pues La Asamblea Nacional dentro de sus atribuciones en el artículo 138 numeral 12 establece: “Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional.

Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en texto del tratado o instrumento internacional”, el mismo se encuentra en La Gaceta Diario Oficial de Nicaragua No. 3 del 4 de enero de 2007.

Para analizar la figura del arbitraje que es utilizada en el Mecanismo, es preciso realizar un análisis de las diversas corrientes (contractualista, jurisdiccional y ecléctica) que tratan de explicar la naturaleza jurídica del arbitraje, institución que es usada por el Mecanismo.

Desde mi punto de vista, la naturaleza jurídica del arbitraje ante el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) no encaja en ninguna de las corrientes que tratan de explicar a dicha institución por tratarse de un arbitraje obligatorio. Por razón de la resolución que lo crea.

En mi opinión, el Mecanismo propuesto por el Consejo de Ministros, viene a desnaturalizar la figura del arbitraje al incorporar dentro del procedimiento del mismo la figura de la “Rebeldía” algo que es atípico y antagónico en el arbitraje, pues este método tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes y no puede imponerse obligatoriamente, aun cuando los Estados reconozcan las facultades del Consejo establecidas dentro del Protocolo de Guatemala.

Por el hecho de que los Estados Partes, son quienes se encargan del nombramiento de los árbitros, los cuales tendrán conocimientos especializados, experiencia en Derecho y en la materia que será resuelta por medio de arbitraje, considero que estamos ante un arbitraje de Derecho, pues este último se aplica en base a los instrumentos de la integración centroamericana y en especial a los de carácter económicos.

En definitiva, el arbitraje que está bajo la dirección del Consejo, como método alternativo de solucionar conflictos es ágil y sus diferentes etapas tienen como finalidad darle a las Partes la facultad de encontrar una respuesta a sus pretensiones que puedan satisfacer sus intereses, pero provoca duplicidad de funciones con la Corte Centroamericana de Justicia.

Refiriéndome al Laudo emitido por el Tribunal Arbitral puedo identificar un elemento que es contradictorio, pues en el entiendo que el Laudo será definitivo, inapelable y obligatorio no podría haber incumplimiento por los Estados, sin embargo, dentro del procedimiento encontramos las llamadas “suspensiones de beneficios” los cuales son utilizados cuando hay incumplimientos por alguno de los Estados involucrado en el Laudo, por tanto, es notorio que el Mecanismo no cuenta fuerza coercitiva que obligue a cumplir al Estado Sancionado.

El Laudo además de que puede ser incumplido es rígido, pues no acepta recurso alguno, a diferencia de otros procedimientos que cuentan con recursos de aclaración o bien de ampliación, el Laudo del Mecanismo al no aceptar recurso considero que es contraproducente, pues de existir un error que perjudique a los Estados Partes estos no podrán manifestar su inconformidad, lo cual puede dar lugar a que sea incumplido mas rápido dicho Laudo. Por tal razón, considero que sería apropiado incluir en el Mecanismo los recursos de aclaración y ampliación.

## Capítulo 3.- La Corte Centroamericana de Justicia como Tribunal Arbitral

### 3.1.- Creación de la Corte Centroamericana de Justicia

Con motivo de la XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Tegucigalpa, el día trece de diciembre de 1991, se suscribió el “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericano (ODECA)” con lo cual crearon el “Sistema de la Integración Centroamericana” (SICA), que tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituir la como región de Paz, libertad, democracia y desarrollo (Giammattei, 1996, p 9).

En el artículo 12 de dicho Protocolo, para la realización de sus fines, se establece como parte del sistema, además de la “Reunión de Presidentes”, “El Consejo de Ministros”, “El Comité Consultivo” y “La Secretaria General”. La Reunión de Vicepresidentes y designados a la Presidencia de la República, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Comité Ejecutivo y La Corte Centroamericana de Justicia (Giammattei, 1996, p 9).

En relación a esta última, se establece que: “garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo”. Además, se dispuso que “la integración, funcionamiento y atribuciones de La Corte Centroamericana de Justicia, deberán regularse en el estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Protocolo”; se estableció, asimismo, que “toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior (que

eran el protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados), deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia”. Y el artículo 3 de las disposiciones transitorias del referido protocolo estableció “para los efectos de los establecido en el párrafo 2 del artículo 35 y en tanto no esté integrada La Corte Centroamericana de Justicia, las controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente protocolo, deberá conocerlas el Consejo Judicial Centroamericano” (Giammattei, 1996, p 10).

La suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en la forma señalada, impulsó a las Cortes Supremas de Justicias de Centroamérica a cambiar el plan de trabajo que se había impulsado para la elaboración del Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia y decidió trabajar en forma paralela en dos sentidos: 1) En organizar el Consejo Judicial Centroamericano como Corte Centroamericana de Justicia ad-interim y elaborar sus Ordenanzas de Procedimientos: y, 2) Trabajar en la elaboración del Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia y ofrecérselos como un aporte a la próxima reunión de Presidentes Centroamericanos (Giammattei, 1996, p 10).

Ambos estudios se realizaron por comisiones de los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que trabajaron a marchas forzadas, en las que también existió colaboración de las Cortes Supremas de Justicia de Panamá y Guatemala, materializándose los mismos en la IV reunión de Cortes Supremas de Justicias de Centroamérica, celebrada en Managua del 9 al 11 de septiembre de 1992, en donde por resolución II se aprobó el proyecto de Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, y se acordó también: “remitirlo a las autoridades y organismos competentes el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a efecto de que sean considerados en su totalidad por quienes suscribirán y ratificarán el Convenio respectivo, ya que el presente expresa el espíritu que ha animado la creación de esa institución por parte de las Cortes Supremas de Justicias de los Estados de Centroamérica” (Giammattei, 1996, p 11).

En su Resolución III, las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica acordaron delegar al Consejo Judicial Centroamericano la facultad de elaborar sus propias Ordenanzas de Procedimiento y Normas Reglamentarias y ese mismo día, once de septiembre de 1992, como consecuencia de lo acordado en el Protocolo de Tegucigalpa, el Consejo Judicial Centroamericano, acordó, denominarse Corte Centroamericana de Justicia ad-interim, se dio sus propias normas procedimentales y se eligió como Presidente de dicho tribunal al Doctor Orlando Trejos Somarriba y como Secretario del mismo al Doctor Rafael Chamorro Mora; y además, se procedió a su instalación, siendo juramentados los integrantes del mismo, por el abogado Don Roberto Ramírez, por Delegación de la IV Reunión de Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica (Giammattei, 1996, p11).

Es así como inició su vida institucional La Corte Centroamericana de Justicia ad-interim, mientras se suscribía, se ratificaba, depositaba y entraba en vigencia el convenio de estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, lo que como veremos posteriormente, no sucedió sino hasta el 2 de febrero de 1994.

Haciéndole justicia a La Corte Centroamericana de Justicia ad-interim, puede afirmarse que las Ordenanzas de Procedimientos le permitieron resolver las consultas que le fueron planteadas y que, no obstante su limitada competencia, las controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados, los resolvió con solvencia, determinando su competencia, aplicando los principios de derecho internacional y derecho de integración, dictando normas de procedimientos en lo no previsto, manteniendo la objetividad de los derechos y salvaguarda de los propósitos y principios del Sistema de la Integración Centroamericana, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso (Art. 14, 15 y 16 de las Ordenanzas de Procedimientos de La Corte Centroamericana de Justicia ad-interim) (Giammattei, 1996, p 12).

Para evacuar las consultas, el Consejo Judicial Centroamericano, como Corte Centroamericana de Justicia ad-interim, fue convocado por su presidente a

diferentes reuniones en las distintas capitales de Centroamérica, habiendo concurrido todos con excepción de Costa Rica, ya sea por los Presidentes o sus Delegados, quienes formaron resolución sobre las consultas planteadas. En uno de sus casos ante la imposibilidad material de reunirse se hizo uso de los medios más modernos de comunicación, entre ellos el facsímil y así pudo lograrse resolución con la mitad más uno de sus integrantes (Giammattei, 1996, p 12).

Los casos que fueron planteados a este Tribunal son los siguientes:

Uno sobre régimen de jurisdicción, competencia, inmunidades y privilegios de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); otro sobre el estado de los bienes de esta última; un tercero, sobre un dictamen técnico del proyecto de Protocolo del Tratado General de la Integración Económica Centroamericana; un cuarto, en el que como ya se refirió se emplearon los medios más modernos de comunicación ante la imposibilidad de reunirse, sobre la inclusión de la opinión vertida anteriormente por La Corte en el proyecto definitivo del Tratado General de Integración antes mencionado; y, el último, referido a la vigencia del Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia.

He referido la actividad de La Corte Centroamericana de Justicia ad-interim, porque tal como fue concebida en el Protocolo de Tegucigalpa, es la Precursora inmediata de La Corte Centroamericana de Justicia, y sus integrantes, en un mismo espíritu centroamericanista han participado en la elaboración de las Ordenanzas de Procedimientos de ésta, en la resolución de las consultas efectuadas y en la formulación del proyecto de Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia (Giammattei, 1996, p 12).

Volviendo a nuestra historia, habiendo entrado en vigencia el Protocolo de Tegucigalpa en julio de 1992, al haber sido ratificado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (para Costa Rica entró en vigencia hasta el día 8 de junio de 1995). Aun cuando de conformidad a lo estatuido para su vigencia sólo sería necesaria la ratificación de tres países, la próxima reunión de Presidentes Centroamericanos, estaba convocada para el mes de diciembre de ese año en

Panamá, por lo que se decidió remitir a los señores cancilleres el Proyecto de Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, a efectos de que lo incluyeran en su agenda de esa reunión y concurrir a la misma con el fin de gestionar que se suscribieran. El Proyecto del Convenio se remitió tal como se aprobó en Managua en septiembre de ese mismo año, con dos observaciones que se consideraron de tipo político y que no debían ser resueltas por las Cortes Supremas de Justicias de Centroamérica o por el Consejo Judicial Centroamericano: están eran: su sede y el que para conocer de las controversias fronterizas territoriales y marítimas se requiera la solicitud de todas las partes concernidas, esta última a solicitud de la Delegación de Honduras (Giammattei, 1996, p 13).

Como era de esperarse, teniendo como testigo de solemnidad a los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, “el Estatuto de La Corte Centroamericana de justicia” fue aprobado tal como lo había elaborado las Cortes Supremas de Justicia y las observaciones resuelta así: la sede sería Managua, capital de la República de Nicaragua, y fueron aceptadas las observaciones de Honduras en lo referente a las controversias fronterizas, territoriales y marítimas (Giammattei, 1996, p 13) .

Este Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, ha sido ratificado, en el orden cronológico, por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y efectuado el depósito correspondiente por los tres países, siendo el último, el día 24 de enero por Honduras que faltaba que lo hiciera, por lo que está vigente para estos tres países a partir del día 2 de febrero de 1994.

### **3.2.- Características de la Corte Centroamericana de Justicia. Naturaleza Jurídica.**

Como se manifiesta en su exposición de motivos:...: “la creación de La Corte Centroamericana de Justicia, no sólo ha sido un deseo y anhelo de los países centroamericanos, sino que, además, en el Sistema de la Integración



Centroamericana, se vuelve un Organismo que puede dictar sentencia de carácter jurídico vinculatorio para la solución de conflictos regionales... se concibe como un tribunal regional, de jurisdicción privativa para los Estados del istmo (esto es exclusivo y excluyente)...”; su competencia se establece como una competencia de atribución, con exclusión de cualquier otro tribunal y, además, de los conflictos entre los Estados, puede conocer de los litigios entre personas naturales y jurídicas residente en el área y los gobiernos, Estados y Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana. En su artículo I, Párrafo 2, se establece: “La Corte Centroamericana de Justicia es el Órgano Judicial Principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia son de carácter obligatorio para los Estados” (Giammattei, 1996, p 13).

### **3.3.- Organización de la Corte Centroamericana de Justicia**

Se encuentra detallada en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Convenio de Estatuto, en donde se determina que: se integrará con uno o más magistrados Titulares, lo cual definió el Consejo Judicial Centroamericano en dos, con base a las atribuciones que le concedía el artículo 46 del citado convenio (Giammattei, 1996, p 14).

Las condiciones y requisitos que deben reunir sus integrantes sin iguales a los necesarios para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países y su elección se hacen por los Órganos o Poderes Judiciales respectivos por el término de diez años, pudiendo ser reelectos (Giammattei, 1996, p 14).

Su duración es permanente, debiendo sus integrantes residir en el país sede, pudiendo reunirse y funcionar temporalmente en cualquier lugar de Centroamérica. Su presupuesto será determinado por La Corte y proporcionado por partes iguales por los Estados miembros (Giammattei, 1996, p 14).

### 3.4.- Competencia de la Corte Centroamericana de Justicia

El Estatuto da a La Corte una Competencia que cubre prácticamente todo el universo judicial centroamericano. Se define en el artículo 22 del mismo y aparece que ejercerá sus funciones principalmente, en los siguientes ámbitos:

- A. Contención entre Estados (Art. 22 literal a y h);
- B. Entre particulares con Estados o entre particulares y Órganos del SICA (Art. 22 literales b, c, f, g);
- C. Consultivo (Art. 22 literales d, e, y l Art. 23);
- D. Arbitral: (Art. 22 literal ch);
- E. Administrativo (Art. 22 literal j);
- F. Constitucionales (Art. 22 literal f).

Finalmente, el artículo 24 establece que las consultas evacuadas por la Corte, con arreglo al Estatuto, Ordenanzas y Reglamentos, relativos al Sistema de la Integración Centroamericana, serán obligatorios para los Estados que la integran.

En tanto, en el artículo 25 del mismo, expresamente se excluye de la competencia de La Corte, la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay, por otra parte, algunas disposiciones que requieren especial comentario, ya que este Sistema Judicial se encuentra institucionalizado tanto por el Protocolo de Tegucigalpa como por el Convenio del Estatuto de la Corte, así: según el artículo 10 del Estatuto, La Corte se constituye en un ámbito independiente de la política, ya que los Magistrados son electos por las Cortes Supremas de Justicia y no por los Poderes Legislativos o Ejecutivo.

El artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, expresa que toda controversia sobre la aplicación de interpretación del mismo y demás instrumentos derivados deberán someterse a La Corte Centroamericana de Justicia.

El artículo 3 del Estatuto dice que La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias con potestad para actuar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, Órganos y organizaciones que formen parte o participen en el Sistema de la Integración Centroamericana y también para los sujetos de derecho privado.

Este último artículo se complementa con el artículo 39 del mismo Estatuto, adquiriendo mayor fortaleza al disponer que las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que dicte la Corte no podrán apelarse (el Laudo sólo admite recurso aclaración o ampliación), son vinculante para los Estados o para los Órganos y Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana y para las personas naturales o jurídicas y se ejecutarán como si se tratara de cumplir una resolución, laudo o sentencia de un tribunal nacional del respectivo Estado, para lo cual bastará una certificación extendida por el Secretario General de La Corte. En caso de incumplimiento de los fallos y resoluciones por parte de un Estado, La Corte lo hará saber a los Estados para que utilizando los medios pertinentes, aseguren su ejecución (Giammattei, 1996, p 15).

El artículo 33 ha abolido y eliminado todo procedimiento de homologación o de exequátur (autorización), de modo tal que las sentencias, resoluciones o cualquier otro mandato deberá ser considerado como si se dictara en el propio territorio donde deben ejecutarse.

Por otra parte, si la Corte dicto sentencia en apelación, el juez, tribunal nacional o los Órganos de la integración en primera instancia ejecutarán el fallo o resolución. Si La Corte las dictara en única instancia, las ejecutará ella misma en la forma que establece el propio procedimiento, pues el artículo 30 del Estatuto la faculta expresamente para determinar su competencia en cada caso concreto.

Las normas y los presupuestos en que deben regular los procesos lo determina el Art. 5 del Estatuto, al afirmar que los procedimientos previstos en el mismo y los que establezcan los Reglamentos y Ordenanzas, tendrán por finalidad la salvaguarda de

los propósitos y principios del Sistema de la Integración Centroamericana, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía al debido proceso.

Finalmente, el Art. 35 del Estatuto le confiere plena libertad a La Corte para apreciar en su conjunto las pruebas de los casos que se le sometan, razonado en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado, así podrá, en sus fallos, usar cualesquiera de los métodos de investigación, interpretación y aplicación del derecho para evitarle caer en el sistema tradicional silogístico de las sentencias.

### **3.5.- La Función Arbitral de la Corte Centroamericana de Justicia**

Habiendo abordado la figura del arbitraje comercial regional sobre la base del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica establecido por el COMIECO, toma especial interés en nuestro estudio el desarrollo de la función arbitral de la que goza la Corte Centroamericana de Justicia. Como Órgano regional con funciones supranacionales, que ha sido creado por el acuerdo y manifestación de voluntad de los Estados partes: Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá.

Como ya hemos mencionado anteriormente, se estableció en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, la Creación de La Corte Centroamericana de Justicia (13 de diciembre de 1991).

Cabe mencionar que los instrumentos jurídicos en los que se encuentra la organización, competencia y las funciones de La Corte Centroamericana de Justicia; son: El Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991, en la que nace como Tribunal Centroamericano; el Convenio de Estatutos del 10 de diciembre de 1992, en la que se le otorgan amplias facultades, competencias y se establece la forma de su funcionamiento, designándosele como Tribunal Internacional de Consulta,

Constitucional y Arbitraje; y la Ordenanza de Procedimiento, estableciendo su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 1995 (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Por otra parte, goza de regulación interna de sus funciones, consignadas en el Reglamento General de La Corte Centroamericana de Justicia, que entró en vigor a partir del 12 de octubre de 1995; el Reglamento de Adquisiciones, entró en vigencia a partir del 17 de octubre de 1994, que regula los requisitos y procedimientos que deberán cumplirse para la adquisición de bienes y servicios de La Corte Centroamericana de Justicia; y el acuerdo de sede, celebrado entre La Corte Centroamericana de Justicia y el gobierno de la República de Nicaragua, el 12 de octubre de 1994; estableciéndose en el artículo 2, que será y es la ciudad de Managua en la que descansa la sede de La Corte Centroamericana de Justicia (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Por lo que habiendo sido reconocida La Corte Centroamericana de Justicia como un “Tribunal Arbitral”, es sustancial conocer el contenido y los alcances que del Arbitraje nos ofrece a los Particulares dentro de este Sistema Comunitario Regional al cual pertenecemos, permitiendo que un ciudadano de cualquiera de los Estados miembros acuda a ella en su función arbitral para someter sus conflictos, la salvaguarda de la seguridad jurídica y la armonía de las relaciones jurídicas entre los habitantes de la región (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

De la norma puntualizada con anterioridad que faculta y dota a La Corte Centroamericana de una gama de funciones a ella atribuidas para su funcionamiento, será preciso enfocarnos a su competencia arbitral por razón de nuestro estudio, expresada así en el artículo 22 del Convenio de Estatutos, en su inciso ch) que lo determina literalmente de la siguiente forma: “Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las Partes la hubieran solicitado como Tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver un litigio *ex aequo et bono*, si los interesados, lo convienen”. Por lo que se puede observar que la Corte Centroamericana de Justicia puede actuar como Árbitro de Derecho por su carácter jurisdiccional y como Árbitro Amigable o componedor si las Partes así lo acuerdan.

La Corte Centroamericana de Justicia en uso de sus atribuciones y de conformidad con los artículos 4,5 y 43 del Convenio de Estatuto de la misma, y conforme al artículo 35 del Protocolo, procedió a reformar el 15 de mayo de 1999 el artículo 6 de la Ordenanza de Procedimientos que regulaba el arbitraje, dicha reforma fue dada por la necesidad de regular de forma especial y detallada la competencia y el proceso arbitral de la Corte Centroamericana de Justicia, dando como resultado el arbitraje de la siguiente manera (Gaceta, 1999, p 4-5).

### 3.6.- Principios del Arbitraje en el Ámbito de la Corte Centroamericana de Justicia

El arbitraje como medio jurídico de solución de controversia presente o futuras que regula La Corte Centroamericana de Justicia, basado en la voluntad de las Partes, posee principios propios de la figura del arbitraje como tal, y otros con matices que hacen al referencia al Órgano que los aplica, en este sentido me refiero a la Corte, entre los cuales figuran:

**La Gratuidad:** Siendo que la reforma al artículo 6 de la OP, ha establecido que el proceso estará regido por el principio de gratuidad, también recordemos que dentro de los requisitos debe contener la cláusula compromisoria, se expresa que las Partes deberán pactar la forma de cubrir los gastos del juicio, por lo que cabe señalar que esta exigencia se refiere a las costas procesales en que puede incurrir para efectos del debido proceso (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

**La Flexibilidad:** El arbitraje esta caracterizado además por ser un proceso flexible, por el que se le otorga a las partes la libertad de disponer y elegir las etapas con las cuales se va a desarrollar de acuerdo a la naturaleza del conflicto surgido entre ellos, y solo en el caso de que las Partes no lo precisen, será el tribunal arbitral quien deberá establecer dicho proceso. Aun en el caso en el que exista un procedimiento ya establecido por el tribunal arbitral corresponde exclusivamente a las Partes aceptar o no someterse al mismo (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Además, carece de requisitos formalistas lo que facilita a las Partes el acceso al Tribunal así como la realización de los diferentes actos que integran el juicio arbitral.

**La contradicción e igualdad de las Partes:** Las Partes tienen Derecho a ser notificadas de las alegaciones y escritos presentados por las Partes contraria y poder así contra alegar y contra probar cada parte asiste a la vista oyendo las alegaciones respectivas con derecho a replica y duplica por lo cual tienen las misma posibilidades de alegación prueba y hacer uso de los recursos establecidos en el artículo 6 de la OP (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007)

**Escritura y Oralidad:** Las Partes presentan sus alegatos y conclusiones bajo la forma de libelos o escritos y casi siempre expresados en forma verbal, pero aunque suele dotarse de cierta preeminencia el desarrollo escrito sobre el verbal, este último es mucha veces decisivo para la solución de la controversia, ante la posibilidad de las Partes de Poder presentar nuevos argumentos, además de la facultad de los miembros del tribunal arbitral de formular preguntas a las Partes para establecer y aclarar los puntos oscuros o insuficientemente tratados en las escritos (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

**De la Publicidad y Gratuidad:** Reconoce la Publicidad para terceros, por que la vista es pública y no existen tasas judiciales es posible la condena en costas, pero el proceso esta regido por el beneficio de la justicia gratuita (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

**La Garantía del debido Proceso:** el libre consentimiento de voluntad de las Partes y la confiabilidad: Se manifiesta el libre consentimiento de voluntad de las partes desde antes del juicio arbitral, concentrada en el acuerdo arbitral que puede ser a *priori* o *posteriori*, del que depende el conocimiento del conflicto que a la Corte Centroamericana de Justicia se someta, y por la cual se establece la igualdad de las Partes que propicia confiabilidad en el proceso y que presentándose de manera conjunta sin excluir ninguno de los principios, dan cumplimientos al principio de garantía del debido proceso (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Además, el juicio arbitral se auxilia y está regido por los principios básicos del derecho comunitario como:

La Atribución de competencia a Organismos supranacionales: De acuerdo al estudio realizado por el Doctor Luis Pérez Navarro en su obra “Los Principios básicos del Derecho Comunitario” este principio se manifiesta cuando los Estados proceden a parte del ejercicio de su competencia transfiriéndolas, del ámbito de la acción Estatal interna al ámbito de la acción Comunitaria, es decir, a favor de Órganos con funciones Supranacionales quienes deber velar por el interés común de todas los Estados que conforman el Sistema de Integración Regional, por lo que poniendo en practica la soberanía, los Estados pueden atribuir el ejercicio de determinadas competencias a un Organismo Regional (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Efecto directo de las Normas que emanan del Organismo Supranacionales: A referirse al carácter vinculante de este principio el Dr. Luis Pérez Navarro, expresa que éste, se manifiesta cuando la propia norma tiene capacidad de producir efectos jurídicos en un Estado miembro, sin necesidad de que los Estados que conforman Parte de la Integración regional la incorporen dentro del Ordenamiento Jurídico interno a través de los procesos con los que generalmente se aprueba la ley interna por el Poder Legislativo del respectivo Estado (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El efecto directo no sólo tiene relevancia para la legislación nacional que se encuentra vigente al momento de la creación de la norma comunitaria, sino para la futura creación de legislación nacional, es con el objeto de impedir la adopción válida de nuevos actos legislativos nacionales que puedan resultar incompatibles con normas comunitarias y de esta manera garantizar la eficacia del Derecho Comunitario (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007)

Permanencia de dichas normas sobre el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados que conforman la Integración Regional: Se pone de manifiesto cuando la norma del ordenamiento comunitario prevalece sobre una norma de Derecho Interno, esto es así porque sólo de esta manera es concebible la eficacia de un ordenamiento jurídico de un proceso de integración (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007)



La Corte Centroamericana de Justicia, además de ser un tribunal arbitral, es un Tribunal Permanente con facultades de Arbitro, para que actúe como Arbitro de Derecho por lo cual deberá ejercer la Profesión del Abogado y en el que deberá resolver conforme a la Ley; o para que actúe como Arbitro de hecho en tal calidad deberá resolver conforme a su buen juicio, parecer y de acuerdo a sus conocimientos, es decir, “*ex aequo et bono*” para lo cual la Corte Centroamericana de Justicia tendrá no sólo jurisdicción y competencia amplia y completa sino también voluntaria (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

Por otra parte, si bien es cierto que dentro de la regulación del procedimiento establecido por la OP y la reforma al artículo 6 de la OP contenida en la Gaceta Oficial de la Corte Centroamericana de Justicia N. 9, del día martes 1 de junio de 1999, no se establece un apartado sobre el nombramiento de los árbitros y sus calidades, se ha planteado que las Partes pueden nombrar entre los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a uno de ellos como arbitro para que conozca de caso o la controversia objeto del juicio arbitral, así mismo pueden las Partes elegir a más de un Magistrado, condicionando esta circunstancia al carácter unipersonal o colegiado que hayan acordado las Partes (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007)

### **3.7.- Juicio Arbitral de la Corte Centroamericana de Justicia**

Activación del Proceso, Solicitud de las Partes: Las Partes habiendo pactado o convenido someter a su controversia a arbitraje ante la Corte Centroamericana de Justicia, deberán por escrito (Gaceta No. 9 CCJ 1999, p 4-5).

1. Sus pretensiones, objeto del litigio, de forma conjunta o separada.
2. Presentar Escritura Pública que contenga el compromiso de Arbitraje ante la Corte, es decir, la determinada Cláusula Compromisoria.
3. Establecer un Procedimiento Para el desarrollo del Proceso Arbitral.

Si las Partes no hubieren establecido dicho Procedimiento en la Cláusula compromisoria, procederá a detallarlo y complementarlo ante la Corte Centroamericana de Justicia, por comparecencia Prejudicial para este efecto (Gaceta No. 9 CCJ 1999, p 5).

Una vez realizada la actuación prejudicial sin que las Partes hayan acordado el Procedimiento a seguir, el arbitraje se tramitará conforme al procedimiento contenido en la OP, pudiendo ser aplicado este mecanismo cuando el procedimiento estipulado por las Partes resultare insuficiente.

Requisitos de la Cláusula de Compromiso Arbitral (Gaceta No 9 CCJ, 1999, p 5):

- ✓ Nombres de los Comparecientes, su personalidad y datos de identificación.
- ✓ Mención del asunto a someter y hechos en que se basa la demanda.
- ✓ Los puntos en controversia entre las Partes.
- ✓ Calidad de árbitro o arbitramiento en que actuara el tribunal.
- ✓ Procedimiento que se Propone.
- ✓ Forma de cubrir los gastos del mismo.
- ✓ Medidas Precautorias que se solicitan.

### **3.8.- Presentación de la prueba ante la Corte Centroamericana de Justicia**

El procedimiento faculta a las Partes para que por mutuo acuerdo se abra a prueba el proceso arbitral y en caso de que las mismas no lo hayan pactado. El tribunal podrá abrir el proceso a pruebas si lo estimare necesario (Gaceta No 9 CCJ, 1999, p 5).

Si el Tribunal resolviera abrir la etapa de prueba, señalará los hechos y el término en que deberán probarse. De lo resuelto se notificará a las Partes y se les ordenará lo que corresponda.

Al tenor del artículo 42 de la Ordenanza de Procedimientos (OP) expresa una lista de los medios probatorios a los que pueden recurrir las Partes, entre ellos:

- ✓ La declaración de las Partes
- ✓ El informe rendido a solicitud del tribunal y los documentos pertinente
- ✓ El testimonio
- ✓ El informe de expertos
- ✓ La inspección ocular

Sin perjuicio de lo anterior La Corte Centroamericana de Justicia podrá exigir o aceptar otros medios de prueba que crea conveniente para declarar, establecer y ejecutar los derechos que tengan o reclamen las Partes, siendo notorio que los medios probatorios no son numerus clausus o excluyente y le permite al árbitro auxiliarse de otros elementos probatorios para dar solución al conflicto. En caso de que el tribunal estimare que de las intervenciones de las Partes, surge la necesidad de Practicar o ampliar las pruebas que ya han sido practicadas, resolverá suspender por una sola vez la audiencia y conceder el término prudencial para la práctica de la prueba (Art. 49 OP)

### **3.9.- Audiencia Pública del Proceso**

Habiéndose evacuado y finalizado la fase Probatoria se procederá a convocar a audiencia pública, la cual será presidida por el Presidente del Tribunal, en la cual las Partes deberán presentar sus alegatos de forma verbal y por escrito, con derecho a réplica y duplica para ambas Partes (Art. 44, 47 OP).

Las Partes deberán presentar sus conclusiones dentro de los tres días siguientes al cierre de la audiencia (Art. 48 OP)

### 3.10.- Fase del laudo y su Ejecución

Transcurrido el termino de alegatos conclusivos, el Tribunal se pronunciara dictando su resolución dentro de los diez días siguientes.

El artículo 6 de la OP en su reforma y remitiéndonos al numeral II, enuncia que las Sentencias serán inapelable y que en contra de ella sólo cabe Recurso de Aclaración y para suplir Omisiones, el artículo 3 del Convenio de Estatuto regula: “La Corte tendrá competencia y jurisdicción propia, con potestad para juzgar a petición de Partes y Resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, Órganos y Organizaciones que formen Parte o participen en el Sistema de la Integración Centroamericana, y para sujetos de derecho privado. Y siendo así establecido, el efecto jurídico procesal resulta de obligatorio cumplimiento para las Partes, de las que hacen mención en la parte final, refiriéndose a las personas naturales y jurídicas en calidad de sujetos de derecho privado (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

De la misma forma se encuentra reconocido el carácter vinculante del Laudo en el artículo 37, 38 y 39 del Convenio de Estatuto al expresar en dichas disposiciones que la resolución que emita la Corte Centroamericana de Justicia, deberán primeramente resolver cada uno de los puntos en litigio y será de obligatorio únicamente para las Partes, el fallo será definitivo e inapelable, lo expresado ya en la reforma al articulado 6 de la OP contenida en la Gaceta Oficial de la Corte Centroamericana de Justicia número 9 del día martes 1 de junio de 1999, aclarando que sólo cabe el recurso de aclaración, ampliación y escrito para suplir omisiones (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El Art 39 del Convenio de Estatuto Particularmente hace directa mención al Laudo, y expresa que en contra de éste no se admitirá Recurso alguno, que es vinculante para los Estados o para los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, y que para las personas naturales y Jurídicas, se ejecutarán como

si se Tratase de un Laudo de un tribunal nacional del respectivo Estado (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

El juicio arbitral ofrecido por la Corte Centroamericana de Justicia, goza de los Presupuestos Jurídicos Procesales necesarios con los cuales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 de la OP, la Corte Centroamericana de Justicia en todo caso en lo no previsto puede señalar los procedimientos a seguir, manteniendo la objetividad de los Derechos y la Salvaguarda de los propósitos y principios del Sistema Regional, la igualdad de las Partes y la garantías del debido proceso (Díaz, M; Cárdenas, J. 2007).

### **3.11.- Recursos Aplicables al Laudo Arbitral**

De la resolución o laudo emitido por el tribunal arbitral, no podrá apelarse, no obstante La Corte Centroamericana de Justicia, de oficio o a solicitud de Partes podrá aclarar o ampliar lo resuelto del mismo, dentro de los treinta días siguientes a partir de la notificación conforme a lo estipulado en el artículo 38 del convenio de Estatuto del la Corte Centroamericana de Justicia. Pero además el artículo 6 de la OP ha ampliado estas disposiciones expresando la facultad de recurrir del Laudo mediante escrito para suplir omisiones.

Dicho recurso podrá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o Laudo arbitral.

### **3.12.- Manifestación de la Corte Centroamericana de Justicia Ante el Arbitraje Que Establece el Consejo De Ministros De Integración Económica (COMIECO)**

Ya desde 1999, originada por la XX Reunión de Presidente del SICA, en la Declaración de Guatemala, se sugirió reglamentar un mecanismo de solución de controversias comerciales y de inversión. A raíz de ello, el Consejo Intersectorial de Ministros, elaboró un Proyecto de Reglamento. Este proyecto, motivó una Consulta de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG.SICA), la que fue evacuada por la Corte Centroamericana de Justicia, con fecha 12 de noviembre del año 2001 (Gaceta No. 12 CCJ, p 1).

En la Parte Resolutiva, la Corte dispuso “SEXTO: Como conclusión de lo expuesto, este Tribunal declara que no procede la celebración de un Convenio entre esta Corte Centroamericana de Justicia y la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que puede establecer un mecanismo paralelo al de este Tribunal, para la solución de controversia comerciales que incluya un arbitraje extrajudicial, administrado por dicha Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) y definido por le Consejo de Ministros de Integración Económica (Gaceta No. 12 CCJ, p 1).

En la propuesta del Reglamento, se trata de establecer un mecanismo de solución de conflictos, que gradual o escalonadamente, conduzca a un arbitraje obligatorio entre las partes. En el número tercero de la citada sentencia de Consulta, se declaró, sobre el propuesto mecanismo de solución de conflictos: “Tercero: La posibilidad de que se establezca un mecanismo de Solución de Controversias Comerciales, que incluya conciliación y arbitraje de carácter extrajudicial, administrado por SIECA y definido por el Consejo de Ministro de Integración Económica, colisiona, en cuanto al arbitraje, con la competencia de La Corte establecida en el literal ch) del artículo 22 del Convenio de Estatuto y con el artículo 35, párrafo segundo, del Protocolo de Tegucigalpa, que le atribuye a La Corte el conocimiento de toda controversia” (Gaceta No. 12 CCJ, p 1).

Evidentemente el Reglamento o mecanismo para Solución de Controversias Comerciales, que incluya conciliación y arbitraje de carácter extrajudicial, administrado por SIECA, colisiona en cuanto al arbitraje con la competencia de artículo 22 literal ch) del Estatuto de La Corte que dispone que es de su competencia: “ch) conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente...” (Gaceta No. 12 CCJ, p 1).

Tal colisión se genera porque se propone crear un órgano para función similar a la de La Corte Centroamericana de Justicia, en un competencia que ya ese Tribunal Posee, lo que vendría a ser duplicidad de función, (Gaceta No. 12 CCJ, p 1).

Legalmente ello no es posible, ya que conforme al Protocolo de Tegucigalpa al crear el SICA, se dijo sobre el Tribunal Centroamericano, en el artículo 35: “Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a La Corte Centroamericana de Justicia”. Es así que, no puede haber en el SICA, otro órgano con función paralela a la de la Corte (Gaceta No. 12 CCJ, p 2).

Los procedimientos de solución de conflictos pueden ser administrativos (arreglo directo, mediación y conciliación) y judiciales (arbitraje) y todos tienen como características común que son originados en la voluntad de las partes.

Por ello no procede crear un arbitraje obligatorio, como se propone y como un último procedimiento obligatorio a recurrirse. El arbitraje, salvo limitadas excepciones que desnaturalizan su esencia, siempre es de carácter voluntario. Dice la sentencia de consulta citada: “CUARTO.....El arbitraje en ningún caso podrá considerarse como una forma obligatoria, sucesiva o gradual, con respecto a otros medios previos de solución de conflictos” (Gaceta No. 12 CCJ, p 2).

Consideran, que todo lo anterior no impide a las partes someter sus conflictos a cualesquiera de los medio de solución mencionados, inclusive al arbitraje (ad-hoc,

es decir constituido para ese caso), pero lo que no puede hacerse es crear otro órgano permanente (de arbitraje institucional) en el SICA, para conocer de esta materia (Gaceta No. 12 CCJ, p 2).

El arbitraje es una competencia del Tribunal de Managua (Corte), regulada por el literal ch) del artículo 22 del Estatuto y reglamentada por el artículo 6 (reformado) de la Ordenanza de Procedimiento de La Corte (Gaceta No. 12 CCJ, p 2).

### **3.13.- Valoración Crítica al Proceso Arbitraje de la Corte Centroamericana de Justicia**

La creación y función de la Corte Centroamericana de Justicia posee particular importancia por razones socio-políticas en la que nace como tribunal permanente facilitador de un control jurisdiccional apegado al principio de legalidad, otorgando seguridad jurídica a los Estados Partes que incentivaron su institucionalización. Haciendo de la región centroamericana una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo.

La Corte Centroamericana de Justicia procura establecer las bases del estado de derecho para toda la región Centroamericana, por tal razón los Estados del istmo deben aceptar la jurisdicción de la Corte acatando sus decisiones, pues al igual que el Protocolo de Tegucigalpa, el Estatuto no admite reserva por los Estados, con lo que se ha querido evitar, que se desnaturalice o distorsione su función de Órgano Judicial Principal y Permanente de Centroamérica.

Como Órgano judicial Permanente la Corte Centroamericana de Justicia ofrece un juicio arbitral que goza de los presupuestos procesales necesarios para dar solución a los conflictos que le sean sometidos. Permitiendo una flexibilidad por el que se les otorga a las partes la libertad de disponer y elegir las etapas a desarrollar de acuerdo a la naturaleza surgido entre ellos, es decir, que si la controversia exige que se



ventile en un proceso expedito las partes están facultadas para realizar un proceso acorde a sus intereses en cuestión de procedimiento.

Debo mencionar que se respeta la naturaleza del arbitraje y la voluntariedad que debe existir en la partes para someterse a dicha figura, se manifiesta el libre consentimiento de voluntad de las partes desde antes del juicio arbitral, concentrada en el acuerdo arbitral, el cual según la Ordenanza de Procedimiento puede ser antes o bien durante el proceso arbitral, respetando las garantías del debido proceso.

En contra posición al arbitraje establecido por el COMIECO la Corte Centroamericana de Justicia garantiza la gratuidad del procedimiento arbitral.

Refiriéndome al Laudo, debo manifestar que posee carácter vinculante para los Estados o para los Órganos y Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana y para las personas naturales o jurídicas, pero a todos les brinda dos figuras que permiten mejorar la aplicación del derecho estas son aclaración y ampliación, que bien puede ser solicitada por las partes o puede ser aplicada de oficio por parte de la Corte, mejorando el proceso.

En cuanto a la postura que adopta la Corte Centroamericana de Justicia ante el arbitraje establecido por el Consejo de Ministro de Integración Económica, manifiesto mi aprobación a lo dicho por la Corte, pues considero que no es posible atribuir un arbitraje a un órgano que no posee las facultades y atribuciones idóneas para desarrollar tal labor arbitral, tal es el caso del Consejo de Ministros de Integración Económica.

En tal sentido, es la Corte Centroamericana de Justicia la que debe de conocer de los conflictos que surjan dentro del Sistema de Integración Centroamericana, ya sean de personas naturales o jurídicas las que se sometan al proceso.

Los fundamentos a nuestra tesis los podemos determinar en el Protocolo de Tegucigalpa, en los artículos 12, párrafo antepenúltimo y 35 párrafo penúltimo, respectivamente disponen que: “la integración, funcionamiento y atribuciones de la

Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse en el Estatuto de la misma,..” y que: “toda Controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia”. Resulta que estos dos instrumentos internacionales comunitarios (Protocolo y Convenio de Estatuto), señalan y configuran el marco jurídico de las atribuciones y competencias de la Corte Centroamericana de Justicia, lo mismo que el mecanismo o procedimiento apropiado para su ejercicio.

El Convenio de Estatuto de la Corte, en su artículo 28, le reconoce su personalidad jurídica; en el 22 le define su competencia y en el literal ch) del mismo, le confiere la atribución de: “Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver un litigio ex aequo et bono, si los interesados, lo convienen”. Por tanto, se debe evitar la duplicidad de funciones, ya que, la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano de la integración encargado de dirimir los conflictos que puedan surgir.

## Conclusiones

1. La Integración Económica Centroamericana es una necesidad de todos los Estados del istmo, con la cual se pretende mejorar la economía de cada uno de estos países, pues al negociar en bloque o región comunitaria, pueden ofrecer mejores servicios a nivel mundial a otras zonas de Derecho Comunitario.
2. Que es de gran importancia la creación de métodos que brinden soluciones a los conflictos que puedan presentarse dentro de la Integración Económica Centroamericana, tutelando la legalidad y seguridad jurídica de las transiciones comerciales.
3. Que el arbitraje como método de solución de controversias constituye hoy en día una figura de gran ayuda, ya que es utilizado como medio alternativo de solución de controversias en las relaciones comerciales de Centroamérica, con el cual se procura dar soluciones satisfactorias a los Estados Partes.
4. Por sus características de flexibilidad, gratuidad y agilidad el arbitraje se constituye como el medio más apropiado al que los Estados Partes pueden acudir al momento de solucionar sus conflictos.
5. Que el Mecanismo de Solución de Controversias que instauró el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), se presenta como una alternativa a las necesidades de los Estados Partes, no obstante cuenta con algunos matices que desnaturalizan la figura del arbitraje, tal es el caso de la rebeldía, figura antagónica en el arbitraje; y la duplicidad de funciones, pues la Corte Centroamericana de Justicia cuenta con un procedimiento arbitral y

facultada para dirimir los conflictos en el marco de la Integración Centroamericana.

6. La Corte Centroamericana de Justicia figura en los instrumentos jurídicos (Protocolo de Tegucigalpa, Convenio de Estatutos de la Corte) de la integración como el órgano que está facultado para realizar el papel de Tribunal Arbitral en la Integración Centroamericana.
7. En cuanto al proceso arbitral establecido por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) debería de entenderse como extrajudicial, evitando de esta manera la duplicidad de funciones en la integración centroamericana.

## Recomendaciones

1. En el marco jurídico del subsistema de integración económica centroamericana, debe existir un único procedimiento arbitral ante la Corte Centroamericana de Justicia.
2. Mientras exista un doble procedimiento arbitral los Estados Partes de la Integración y todo sujeto ya sea persona natural o jurídica deben contar con la libertad de decidir si quieren solucionar sus conflictos por medio del arbitraje u otro medio, pues al incorporarse la figura de la rebeldía en el Mecanismo que impulsa el Consejo, se esta violentando la libertad de la Partes.
3. Que el Laudo arbitral que se emite en el Mecanismo establecido por el Consejo permita a los Estados Partes hacer uso de recursos tales como: aclaración y ampliación, con el fin de mejorar la tutela de los derechos de los Estados Partes, ya que al carecer de estos posibles recursos se estaría tutelando a medias los derechos de las Partes.
4. La Corte Centroamericana de Justicia debería poseer carácter coercitivo, en cuanto a reconocimiento y ejecución del Laudo arbitral, ya que sus resoluciones, laudos y sentencias según sus Estatutos, se deben cumplir como si se tratara de una tribunal interno, en este sentido la Corte como institución supranacional de la Integración Centroamericana debería contar con esa facultad para asegurar la tutela de los derechos.
5. Que la Reunión de Presidentes determine mediante un instrumento jurídico cuál de los procesos arbitrales debe primar, pues tanto la Corte Centroamericana de Justicia como El Consejo de Ministros de Integración Económica manifiestan tener un proceso primario, lo que genera inseguridad jurídica.

## Bibliografía

Centro de Derechos Constitucionales (CDC) Carlos Núñez Téllez, 2007, Constitución Política de la República de Nicaragua, 2007, 1ª edición, Managua Nicaragua. Impresiones Helios, S.A.

DIAZ CANO, Miriam de Fátima, CARDENAS CRUZ, Jessica Francela. Monografía El Arbitraje Comercial en Centroamérica. (Licenciatura en Derecho). Managua, Universidad Centroamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2008.

Giammattei Avilés, Jorge Antonio. (1996). Normativa Jurídica Corte Centroamericana de Justicia. Managua, Nicaragua 1996.

Hernández Chávez, Alcides. (1994). *La integración de Centroamérica desde la federación hasta nuestro días*. 1 a ad.- San José, CR.: DEI, 1994.

Matus Roa, Karla. Monografía Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (Licenciatura en Derecho). Managua, Universidad Centroamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 1998.

MAIRENA VALLE, Ingrid, Paper Procedimiento Arbitral entre las controversias derivadas del quebrantamiento de los instrumentos de Integración Económica Centroamericana. (Especialización en Derecho Económico). Managua, Universidad Centroamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2008.

Somarriba Jarquín. Francisco. (2008). Derecho de Integración, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana, Managua, 10 junio 2008.

SICA, 2006, Estado de situación de la integración económica centroamericana, (Consultado 9 de Agosto de 2010) Disponible en Internet: [http://www.sice.oas.org/tpd/cacm\\_dom/Studies/EstadoSIECA\\_s.htm](http://www.sice.oas.org/tpd/cacm_dom/Studies/EstadoSIECA_s.htm))2006

Ulate Chacòn, E. (2008) Revista Electrónica Iberoamericana. El Protocolo de Tegucigalpa y la Jurisdicción d la Corte Centroamericana de Justicia, Vol.2, PP 23-42 (Consultado 10 de Agosto de 2010) Disponible en Internet: <http://www.urjc.es/ceib/>

### **Textos Normativos**

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) suscrito el 13 de diciembre de 1991 en Tegucigalpa, Honduras. La Gaceta, diario oficial de Nicaragua No. 130 del 8 de Junio de 1992. Modificado e 27 febrero de 2002. Aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua con el Decreto No. 66-2002, el 5 de julio de 2002, la Gaceta diario oficial de Nicaragua No. 127, del 8 de Julio 2002.

Resolución No. 106-2003 (COMIECO XXVI). Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales. La Gaceta, diario oficial de Nicaragua No. 122, del 1 de julio de 2003.

Resolución No. 170-2006 (COMIECO XLIX). Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales. La Gaceta, diario oficial de Nicaragua No. 3, del de enero de 2007.

Reforma al artículo 6 de la Ordenanza de Procedimientos. La Gaceta, Corte Centroamericana de Justicia No. 9 del 1 de junio de 1999.

Resolución de Consulta de la Corte Centroamericana de Justicia ante convenio arbitral. La Gaceta, Corte Centroamericana de Justicia No. 12 del 14 de Noviembre de 2001.

# ANEXOS